



Manifestación antigubernamental en Beirut, Líbano, octubre de 2019. Crédito: Sam Tarling/Getty Images

PARTE 2

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020

ACCIÓN COLECTIVA ANTE LA INJUSTICIA ECONÓMICA

ACCIÓN COLECTIVA ANTE LA INJUSTICIA ECONÓMICA

PROTESTAS EN CHILE, COLOMBIA, CUBA, ECUADOR, EGIPTO, HAITÍ, IRAK, IRÁN, LÍBANO Y ZIMBABUE



Un manifestante vestido de payaso participa en una protesta contra el gobierno en Bogotá, Colombia. Crédito: Ovidio González/Getty Images

En 2019 se produjeron protestas masivas sin pausa, en un país tras otro. Muchas de ellas exigieron cambios fundamentales y libertades democráticas, como ocurrió con las que sacudieron el sistema en Hong Kong y Sudán –discutidas en el capítulo de este informe que se enfoca en las peticiones de democracia– y en las de Chile y el Líbano, que se abordan a continuación. Sin embargo, uno de los aspectos sorprendentes de muchas de las protestas de 2019 fue que a menudo estuvieron motivadas por una misma razón: un cambio relativamente pequeño en una política gubernamental económica o social produjo una respuesta furiosa y masiva a causa de su impacto desproporcionado sobre personas que ya padecían pobreza o exclusión, o que se encontraban entre los desfavorecidos por la creciente desigualdad económica, y cuya sensación de inseguridad en consecuencia se incrementó enormemente.

El punto de ruptura que hizo que la gente tomara las calles de Chile fue un pequeño incremento en las tarifas del ya de por sí costoso sistema de transporte. En el Líbano, el detonante fue una propuesta para imponer un impuesto al uso de WhatsApp. En un país tras otro, incluidos Ecuador, Haití y Zimbabue, la indignación fue provocada por un incremento en el precio del combustible; esta fue también la causa desencadenante de las protestas de 2019 que dieron como resultado el derrocamiento de un dictador que llevaba muchos años en el poder en Sudán. En Colombia, Egipto y Haití, la indignación ante la corrupción persistente y descarada fue otro motivo de protesta.

Muchas de las protestas de 2019 exhibieron un amplio rechazo e indignación por los impactos de las políticas económicas neoliberales, tales como las implementadas en Chile a lo largo de tres décadas, presentadas por sus promotores como el modelo a seguir a nivel internacional. Es evidente que estas políticas –que a menudo incluyen la privatización de servicios públicos, recortes al gasto público y los subsidios, restricciones de los derechos laborales e impuestos regresivos– para mucha gente no estaban funcionando. Las políticas económicas neoliberales han llevado a muchas personas a condiciones de desigualdad económica e inseguridad, volviéndolas vulnerables frente a las más pequeñas sacudidas, tales como un leve aumento en los precios de bienes básicos como alimentos, combustible y transporte. Las sacudidas económicas rápidamente derivan en protestas cuando la gente siente que tiene poco que perder, cuando no encuentra demasiadas alternativas a la protesta y necesita hacer algo para intentar asegurarse los bienes básicos cuyo disfrute está siendo amenazado.

El aumento en el precio de los combustibles se ha convertido quizá en la causa

más predecible de las protestas, porque su efecto es profundo y regresivo: todas las personas resultan afectadas, pero las económicamente más vulnerables reciben un impacto desproporcionado. Por ser una preocupación común – todo el mundo necesita combustible, o bienes cuya producción requiere de combustible, y todo aumento en el costo de los combustibles genera un aumento en los precios de otros bienes básicos, tales como alimentos y medicamentos– la indignación frente al aumento puede tener el efecto de unir a personas procedentes de grupos dispares que bajo otras circunstancias sentirían que tienen poco en común.

Allí donde los precios de los combustibles aumentan considerablemente, cabe esperar protestas. Éstas serán más profundas y tendrán mayor alcance en los países con disfuncionalidades económicas y políticas subyacentes, que se profundizarán y alimentarán la ira popular. En los países donde existen pocos canales de expresión –porque la democracia no está muy arraigada y el espacio cívico está fuertemente restringido– las protestas serán furiosas e incluso violentas. El descontento se intensifica cuando el aumento en el precio de los combustibles ocurre en países que son grandes exportadores de gasolina y gas, ya que en esos casos la población debe pagar altos precios por un recurso nacional abundante, situación que contrasta con la de las a menudo corruptas élites, que viven protegidas en su aislamiento y se enriquecen como resultado de su control sobre la industria petrolera.

Esto puede ocurrir incluso cuando existen buenas razones para reducir el subsidio a los combustibles –por ejemplo, en respuesta al cambio climático, como intentó hacerlo en 2018 el gobierno de Francia, generando la reacción del **movimiento de los chalecos amarillos**. Sin embargo, esta no pareció ser la motivación de los aumentos de 2019: el gobierno de Ecuador, por ejemplo, al tiempo que anunciaba la eliminación del subsidio a los combustibles, declaraba también su intención de aumentar su producción petrolera, revelando que su acción no se derivaba de su preocupación por el cambio climático. Independientemente de lo que motivara los cambios en las políticas económicas, con frecuencia fueron criticados porque su adopción pareció ser decidida sin ninguna consideración por los fuertes impactos que tendrían para muchas personas, o porque no fue acompañada de medidas sociales que ayudaran a contrarrestar sus impactos negativos. Los intentos de expandir la base impositiva, por ejemplo, a menudo supusieron el aumento de los impuestos indirectos, que impactan de forma desproporcionada sobre las personas más pobres; en cambio, raramente se intentó tasar directamente los ingresos y la riqueza de las élites adineradas.



Mujeres indígenas reclaman que la policía no reprima a las protestas contra las medidas económicas impuestas por el gobierno ecuatoriano en octubre de 2019.
Crédito: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images

En ocasiones, el descontento fue provocado por nuevas políticas neoliberales de austeridad que demandaban reducciones profundas del gasto, impuestas por instituciones financieras internacionales, y particularmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar del rechazo generalizado que generaban, las instituciones financieras internacionales parecían más comprometidas que nunca con las políticas económicas liberales y los paquetes de austeridad, impulsándolas en diversos países —entre ellos, Ecuador y Haití— a cambio de su apoyo financiero. Las políticas de austeridad están siendo impuestas en los países del sur global pese a que tanto ellas como las teorías que las respaldan han sido puestas a prueba en Europa, así como en otros sitios y han sido

desacreditadas y **rechazadas** por los estados y los ciudadanos de los países donde se aplicaron.

Por estas razones, el malestar de los manifestantes rápidamente se convirtió en un cuestionamiento más profundo del sistema económico y político; en muchos casos, el descontento había ido acumulándose durante mucho tiempo y encontró entonces un punto de inflexión. En Chile, la gente demandó el fin de las políticas económicas neoliberales, así como de la enorme desigualdad que éstas habían creado, además de una reforma profunda del sistema político. En el Líbano, la gente intentó derribar la estructura política existente y las

políticas sectarias que han frustrado toda esperanza de cambio, estableciendo en su lugar estructuras nuevas y no sectarias. Las demandas en Irak fueron similares. En muchos contextos diferentes, la gente se volvió contra los tomadores de decisiones políticas por considerarlos lejanos e impermeables a sus necesidades, y considerar que tomaban las decisiones económicas sin prestar atención a sus consecuencias. La gente demostró que no quería tener que elegir entre poner comida en la mesa o participar en política: querían ambas cosas, y buscaban una profundización de los procesos democráticos que generara cambios fundamentales en las políticas económicas y sociales.

En muchos casos, la gente joven tuvo un rol de liderazgo en los movimientos por el cambio. En contextos en muchos casos caracterizados por un muy alto desempleo juvenil, exigieron que sus voces fueran escuchadas a la hora de tomar las decisiones que afectarían a sus medios de vida y a sus futuros. Las personas jóvenes demostraron que estaban listas para cuestionar las opiniones dominantes y los modelos establecidos, y notaron de inmediato la brecha generacional que los separaba de quienes tomaban las decisiones y hacían sus vidas tanto más difíciles. Las mujeres se ubicaron en la primera línea (*véase sección*) e insistieron en que las protestas incluyeran demandas de igualdad, incluidas las relativas a los derechos y la participación equitativa de las mujeres. Incluso en ambientes socialmente conservadores, las mujeres combatieron su habitual exclusión del debate y de los cálculos del Estado al tomar decisiones.

El liderazgo de las mujeres en las protestas contribuyó a su éxito, entre otras cosas, porque demostró la amplitud del alcance de los movimientos de protesta y el modo en que éstos reunían a gente muy diversa. Personas procedentes de diferentes clases y con diversas identidades se unieron en movimientos masivos de carácter amplio y descentralizado. En Chile, estudiantes y sindicalistas encontraron intereses comunes. En el Líbano, Irán e Irak, la gente desafió las divisiones sectarias que normalmente le impiden actuar conjuntamente y generan competencia entre los diferentes grupos, para exigir cambios que beneficiaran a todos. La gente adoptó conscientemente tácticas de protesta utilizadas en otros contextos: durante la **ola de protestas** que experimentó América Latina, manifestantes de diferentes países se sintieron identificados unos con otros, y se sintieron parte de una lucha común.

Como consecuencia de ello, los movimientos de protesta fueron audaces, creativos y a menudo festivos, y utilizaron tácticas de protesta que con frecuencia incluyeron bloqueos de calles, ocupaciones de espacios clave y

otras acciones directas no violentas y tácticas de desobediencia civil. La gente demostró que estaba lista para desafiar leyes injustas que buscaban limitar la expresión pública del disenso.

Dado que a menudo las personas violaron leyes restrictivas, y también porque sus exigencias eran de amplio alcance, ya que perseguían cambios sustanciales en la distribución del poder económico y político, a menudo las protestas fueron recibidas con severa represión. Los gobiernos restringieron rápidamente las libertades fundamentales, imponiendo toques de queda y estados de emergencia. En todas partes ocurrieron muertes como resultado del uso de fuerza excesiva y letal por parte de las fuerzas de seguridad; incluso cuando hubo violencia por parte de los manifestantes, quienes arrojaban piedras e iniciaban fuegos fueron injustificadamente atacados con armas de fuego. En Irán e Irak la masacre alcanzó una escala industrial. Pero incluso en países donde las libertades cívicas y democráticas son generalmente menos restringidas, como en Chile, las violaciones de derechos humanos se volvieron costumbre. Las cárceles se llenaron con miles de detenidos, y en muchos contextos la violencia de las fuerzas de seguridad tuvo carácter sexista, ya que tuvo el claro objetivo de impedir la participación de las mujeres en las protestas a través del abuso sexual y las amenazas en contra de sus familias. En muchos países, los periodistas fueron el blanco y las redes de teléfono móvil e internet fueron bloqueadas.

En muchos contextos, la violencia contra las protestas únicamente contribuyó a reclutar mayor apoyo y aumentar la indignación, llevando a los manifestantes a plantear mayores cuestionamientos sobre la validez del uso del poder coercitivo del Estado y agregando a sus demandas la rendición de cuentas y reparaciones por las violaciones cometidas durante las protestas.

En casi todos los casos, las protestas tuvieron impacto, ya que rápidamente se descartaron las propuestas de cambio que habían generado las movilizaciones. Sin embargo, las manifestaciones continuaron, ya que sus demandas se habían convertido en reclamos por cambios más radicales. En algunos contextos, se alcanzaron o prometieron cambios más importantes –tales como el proceso de reforma constitucional en Chile, o el cambio de gobierno en el Líbano– ofreciendo nuevas oportunidades para el involucramiento de la sociedad civil y el reencauzamiento de las protestas. En muchos casos, las manifestaciones continuaron en 2020, y recién se interrumpieron frente a la expansión de la pandemia del COVID-19. No existen soluciones fáciles para los profundos cuestionamientos económicos y políticos planteados por las movilizaciones, y la indignación y las demandas de cambio seguirán presentes.

CHILE: 30 AÑOS, NO 30 PESOS

A mediados de octubre el precio del boleto de metro en la capital de Chile, Santiago, se incrementó en 30 pesos chilenos. Pese a su magnitud aparentemente menor—de alrededor de cuatro centavos de dólar—este aumento vino a engrosar una de las tarifas de transporte más altas de América Latina. En un país que es reconocido como uno de los más **desiguales** económicamente de la región —y el más desigual de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, donde el **70%** de la población gana un sueldo mínimo mensual de apenas 700 dólares estadounidenses, el aumento de las tarifas demostró ser un punto de inflexión. Inmediatamente después del anuncio del incremento, los estudiantes iniciaron una campaña de evasión masiva del pago. La **sugerencia** del entonces ministro de economía, Juan Andrés Fontaine, fue que los afectados por el incremento simplemente debían levantarse más temprano para evitar el pago de tarifas de hora pico, lo cual no hizo sino echar más leña al fuego.

En lugar de escuchar la indignación, la reacción inmediata del gobierno fue una severa represión. El 18 de octubre estalló una **protesta** espontánea y de gran escala en las calles de Santiago; la gente colocó barricadas y algunas estaciones de metro fueron incendiadas. La respuesta de la policía fue lanzar gases lacrimógenos contra la multitud. Posteriormente el gobierno incrementó la represión, declarando el **estado de emergencia** y desplegando a las fuerzas militares en las calles. Al día siguiente, el 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera suspendió el aumento de las tarifas, pero también impuso un **toque de queda** a nivel nacional: el primero desde el fin de la dictadura militar de Pinochet, 29 años atrás.

Aunque el incremento a las tarifas fue suspendido, las protestas **continuaron**, al igual que la violencia contra ellas. Las protestas continuaron debido a que el descontento inicial por las tarifas de metro se convirtió en catalizador de un descontento más amplio, que rápidamente incorporó y articuló otras preocupaciones, incluidos los precios de la electricidad y el combustible, el costo de la educación y la atención de salud, y los bajos sueldos y pensiones. La furia se enfocó en las políticas de neoliberalismo económico que han sido aplicadas en Chile durante décadas. Inicialmente **impuestas a la fuerza** bajo la dictadura de Pinochet, esas mismas políticas fueron en esencia mantenidas, con variaciones mínimas, por subsiguientes gobiernos de diferentes tendencias políticas. Los manifestantes demandaron el fin del llamado “**milagro económico**” chileno, denunciándolo como un modelo fallido y argumentando en contra de décadas

de un análisis tendencioso que había posicionado al país como la fórmula a seguir por las economías emergentes.

El descontento público no es novedad en Chile, un país que ha sido testigo de varias protestas a gran escala a lo largo de la última década, muchas de ellas lideradas por estudiantes. **Soledad Fátima Muñoz**, del programa y festival feminista **Current Symposium**, ubica a las protestas de 2019 en el marco de esas corrientes de protesta y disenso más amplias¹:

*Esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las **protestas masivas** contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el **Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica** y contra la **Ley de Pesca**, las **protestas feministas** y del movimiento impulsado bajo la consigna “**Ni Una Menos**”, las movilizaciones por la **deuda histórica** con los profesores, las **protestas estudiantiles** de 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada **Ley de Aula Segura**.*

En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

Las protestas de 2019 fueron de mayor escala que las anteriores. A las acciones iniciales de los estudiantes les siguieron las protestas más masivas en la historia reciente de Chile, con cientos de miles de personas en las calles, respaldadas por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Luego de décadas de democracia, estas protestas constituyeron el primer desafío serio al legado persistente de la dictadura. Esto se reflejó en las poderosas consignas que impulsaron las protestas: “Chile despertó” y “No son 30 pesos, son 30 años”.

Nicole Romo, de la **Comunidad de Organizaciones Solidarias**, una red de más

¹ Todas las entrevistas citadas en este reporte son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas están disponibles en nuestro sitio web: <https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews>.

“LA MOVILIZACIÓN NACIONAL QUE VIVIMOS DEJÓ EN EVIDENCIA DE MANERA NÍTIDA QUE TENEMOS DOS CHILES HABITANDO EN UN MISMO TERRITORIO, DOS CHILES QUE NO SE CONOCEN Y NO SE ENCUENTRAN: QUIENES TIENEN PRIVILEGIOS Y QUIENES NO LOS TIENEN”

NICOLE ROMO



de 200 OSC chilenas, también enfatiza las profundas raíces y el carácter amplio de las protestas:

El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre fue la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

La movilización nacional que vivimos dejó en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen.

Esto supuso, como bien lo relata Soledad, que las protestas englobaran numerosas demandas por cambios fundamentales, tanto económicos como políticos:

Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a \$500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora. El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

La agenda radical de las protestas explica, al menos en parte, la brutal respuesta del Estado. Debido a que no podía aceptar los cambios fundamentales en la distribución del poder exigidos por los manifestantes, el Estado detuvo a miles de personas y empleó la violencia contra ellas. A los pocos días del inicio de las protestas, **más de 2.100 personas** habían sido detenidas y al menos 15 habían muerto. Hubo muchos saqueos y disturbios; sin embargo, la brutal violencia y el maltrato a los detenidos por parte de las fuerzas de seguridad fueron de tal magnitud que suscitaban comparaciones con la época de la dictadura. Nicole señala la escala de la violencia y la represión:

Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). En el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la

movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

El presidente Piñera fue criticado por su lenta reacción a las protestas. Una foto que hizo **viral**, en la que se lo veía cenando en un exclusivo restaurante de la ciudad mientras en la zona se desarrollaban las protestas, fue por muchos señalada como símbolo la desconexión entre la élite y las masas. El presidente se **disculpó** por televisión y anunció un paquete de concesiones que incluyó aumentos de las pensiones, el congelamiento de los precios de la energía eléctrica, cambios en los costos de los servicios médicos e impuestos más altos a los ricos. Los manifestantes criticaron las medidas por no estar a la altura de sus exigencias. Nicole describe algunas de sus principales críticas:

La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de éstas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, las protestas continuaron, y también lo hizo la represión. Desafortunadamente, los **grupos anti-derechos** también aprovecharon la oportunidad para obtener réditos, como lo relata Soledad:

*A la represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal **John Cobin**, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California, Estados Unidos.*

El gobierno argumentó que los fallecidos eran agitadores y saqueadores, y reportó que 110 supermercados habían sido saqueados y 13 edificios incendiados. Si bien la escala de violencia indudablemente alcanzó niveles sin

precedentes, la respuesta del gobierno de calificar a todos los manifestantes, incluida la mayoría que se manifestaba pacíficamente, de violentos y criminales solo contribuyó a que el antagonismo de la gente aumentara. La sociedad civil chilena brindó evidencia de que la mayoría de las muertes habían sido causadas por la brutalidad policial. La investigación **indicó** que la violencia estatal no solamente había sido excesiva y desproporcionada, sino que además formaba parte de una estrategia deliberada para desalentar a otros de unirse a las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) **condenó** el uso excesivo de la fuerza, mientras que *Childhood Advocacy* y UNICEF Chile hicieron un llamado **urgente** al gobierno a cumplir las leyes nacionales y los estándares internacionales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia durante el estado de emergencia.

Como lo sugiere Nicole, en contraste con la reacción inicial de gobierno, la gente fue capaz de rechazar la violencia al tiempo que respaldaba las demandas de los manifestantes:

Los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, el 25 de octubre se realizó la protesta más grande en la historia democrática de Chile. Alrededor de 1,2 millones de personas —más del 6% de la población chilena— marcharon pacíficamente en Santiago para demandar justicia social; muchas de ellas pedían la renuncia del presidente Piñera. A los pocos días, Piñera **destituyó** a ocho ministros de su gabinete, incluido Juan Andrés Fontaine. Los cambios en el gabinete no redujeron la indignación, y tanto las protestas como la violencia **continuaron**. El 12 de noviembre, más de 70 organizaciones se unieron para convocar una **huelga general**. Las protestas de los indígenas mapuches en el sur de Chile también **atacaron emblemas** del antiguo dominio español y del distante gobierno central, como símbolos de su propia exclusión, derribando y decapitando estatuas y reemplazándolas con símbolos indígenas.

Otra protesta demandó que se asumiera la responsabilidad y se otorgaran reparaciones por los muertos y heridos. El 1º de noviembre la gente **marchó**

en todo el país para exigir justicia para los asesinados. En respuesta, hubo algunas tentativas de llamar a las fuerzas de seguridad a rendir cuentas por sus acciones, pero estas se quedaron cortas en relación con las demandas de los manifestantes. A principios de noviembre un jefe policial que había disparado contra dos estudiantes en una manifestación escolar fue **arrestado** y acusado de disparar su arma de forma ilegal en una escuela pública. Otros doce oficiales fueron investigados por golpes y acoso sexual. Pero esto no fue suficiente, por lo que miles de personas se unieron a una **protesta silenciosa** en enero de 2020 para denunciar la violencia del Estado contra las protestas, cubriendo uno de sus ojos para llamar la atención sobre los cientos de personas que habían sufrido **lesiones oculares** como resultado de la violencia de las fuerzas de seguridad; dichas personas habían marchado el mes anterior para exigir **reparaciones**.

El impacto de las protestas y la violencia se sintió a escala internacional. El 30 de octubre el presidente Piñera **anunció** que Chile no podría ser anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico programado para noviembre y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en diciembre. La COP25, inicialmente programada para realizarse en Brasil antes de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático, se retractara, sería ahora realizada en un tercer país, España (*véase sección*). La misma disfunción política y los fracasos económicos que interfieren con la urgente respuesta que demanda el cambio climático estaban ahora obstaculizando incluso la realización de una reunión sobre el tema. Chile estaba perdiendo su reputación internacional de estabilidad, lo que debería generar preguntas sobre qué significa realmente la estabilidad, y para quién; y a qué precio, según las élites internacionales, se alcanza dicha estabilidad.

El ámbito doméstico y el internacional se conectaron de forma implícita en el contexto de descontento en Chile, debido a que sus políticas económicas neoliberales han sido proclamadas como modelo internacional, y porque las inversiones internacionales han sustentado la injusticia económica estructural en el país, según explica Soledad:

Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que se formaron en Estados Unidos a mediados de la década del '50, y que



Un manifestante se para con un cartel frente a una barricada de Carabineros en el quinto día de protestas contra el gobierno en Santiago de Chile, en octubre de 2019. Crédito: Marcelo Hernández/Getty Images

servieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

*Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso **expuesto** por la periodista Meera Karunanathan, que explica que Ontario Teachers' Pension Plan es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esva, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto*

*es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que **reconoció** el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.*

El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa

canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

La sociedad civil chilena también internacionalizó su mensaje. Músicos y deportistas chilenos se volvieron cada vez más **explícitos** en su apoyo a las protestas, llamando la atención internacional sobre la represión que estaba teniendo lugar. La **performance** musical del grupo feminista Las Tesis, “Un violador en tu camino”, viajó por todo el mundo y fue replicada en decenas de países y en diversos idiomas (*véase sección*).

Junto a estos esfuerzos, los grupos de la sociedad civil desempeñaron un rol esencial en la documentación y el monitoreo de la violencia en las protestas y las violaciones de derechos por parte de las fuerzas de seguridad, proponiendo alternativas para superar el *impasse*, como describe Nicole:

Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

Desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. En tanto que organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

En general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

La Comunidad de Organizaciones Solidarias **hizo un llamamiento** a un nuevo contrato social que debería alcanzarse a través del diálogo democrático; a medida que transcurrían las protestas, la atención pasó a centrarse en la exigencia de una profunda reforma constitucional. La presión de la sociedad civil dio

“DEBEMOS CREAR CONCIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL PARA QUE SE RESPETEN LAS DECISIONES DEL PUEBLO DE CHILE Y SE BRINDE PROTECCIÓN A SUS PUEBLOS ORIGINARIOS, SIN LOS BLOQUEOS NI LAS INTERVENCIONES POLÍTICAS QUE RESGUARDAN AL CAPITAL EXTRANJERO Y PERPETÚAN LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE”

SOLEDAD FÁTIMA MUÑOZ





Un manifestante reivindica las luchas estudiantiles durante las protestas contra el gobierno de Piñera en Chile. Crédito: Claudio Santana/Getty Images

resultados. A mediados de noviembre, todos los principales partidos políticos habían **acordado** un referéndum para iniciar un proceso para reemplazar la constitución de la era de Pinochet, que consagra muchas de las políticas que contribuyen a la desigualdad. Pese a que el presidente Piñera propuso inicialmente que el Congreso se encargara del proceso, la presión callejera lo forzó a conferir un importante rol a la ciudadanía. En el **referéndum**, inicialmente programado para abril de 2020 pero **pospuesto** a causa de la pandemia del COVID-19, la ciudadanía podrá votar sobre si quiere una nueva constitución y, de ser así, si quiere que sea redactada por un cuerpo formado por ciudadanos y legisladores, o por uno integrado enteramente por ciudadanos elegidos, según el modelo de asamblea ciudadana que ha tenido éxito en otros países,

especialmente en Irlanda.

Las protestas continuaron incluso después de la promesa del referéndum. En enero de 2020, las **protestas de los estudiantes** contra la desigualdad en el sistema educativo provocaron la suspensión de los exámenes de admisión en muchas instituciones, y **estallaron** protestas contra la violencia policial después de que un vehículo policial atropellara y matara a una persona. Las protestas persistieron en un marco de **división** entre quienes estaban satisfechos con el referéndum y quienes lo criticaban.

Mientras que muchas personas albergan la esperanza de que el proceso resulte

en un mayor reconocimiento de derechos, otras muestran preocupación por los muchos detalles que no han sido definidos y el gran poder que todavía se concentra en manos de los mismos políticos que ya les han fallado en el pasado. La gente cuestionó los plazos, argumentando que el largo período previo al referéndum debilitaría el impulso del movimiento de protesta y multiplicaría las oportunidades para la desinformación y la manipulación de la opinión pública. También se expresaron preocupaciones sobre el límite de edad para la participación, dado el rol vital de la juventud durante las protestas, y la ausencia de representación adecuada para los grupos excluidos, incluidas las mujeres y las personas indígenas. En marzo de 2020, muchas de estas preocupaciones se apaciguaron tras la **aprobación**, en primera lectura, de una ley para establecer la paridad de género a lo largo del proceso. Los manifestantes más radicales, por su parte, vieron al proceso de reforma constitucional como una distracción de la urgencia de las exigencias económicas. Hubo también mensajes confusos de parte del Estado: al mismo tiempo que avanzaba hacia el referéndum siguió introduciendo nuevos castigos: así, en enero de 2020 se aprobó una “**ley anti-saqueos**” que impuso penas más duras para delitos tales como el vandalismo y la construcción de barricadas.

Dado el nivel de violencia y represión que han experimentado, muchos manifestantes se mantendrán atentos y continuarán exigiendo que el proceso de reforma constitucional cumpla con sus altas expectativas. Hacia mediados de enero de 2020, **al menos 27 personas** habían muerto, 3.649 habían sido gravemente heridas, 412 habían denunciado torturas, 191 habían reportado acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad y 405 habían sufrido lesiones oculares, en tanto que 10.253 habían sido arrestadas. El Instituto Nacional de Derecho Humanos **reportó** que estaba compilando 384 demandas judiciales contra la policía y las fuerzas armadas, entre las que se contaban seis casos de homicidio.

De acuerdo con las encuestas, al momento de redactar este informe más del 80% de los chilenos está a favor de una nueva constitución. Si el referéndum tiene éxito, las elecciones para la asamblea constituyente tendrán lugar a continuación, y la asamblea tendrá un plazo de un año para redactar la nueva constitución, aprobarla con una mayoría de al menos dos tercios de los votos en el Congreso y someterla a ratificación mediante otro referéndum nacional. Hasta que se inició la crisis del COVID-19, la población se encontraba organizando asambleas de base y grupos de discusión en los vecindarios para hablar sobre el tipo de constitución que querían. Existe una fuerte demanda no solamente de una nueva constitución sino también de un cambio cultural.

En nombre de las personas asesinadas, heridas y abusadas durante las protestas, la sociedad civil continuará movilizándose, participando y exigiendo avances reales; cabe esperar más protestas masivas si el gobierno no cumple con las altas expectativas de la ciudadanía.



Grupos indígenas protestan en Quito, Ecuador, contra la eliminación de los subsidios al combustible. Crédito: Jorge Iván Castaneira Jaramillo/Getty Images

ECUADOR: PROTESTAS REVIERTEN MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Las políticas económicas neoliberales también fueron recibidas con acciones de protesta masiva en Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha recibido el reconocimiento internacional por **abrir** el espacio para la sociedad civil, **restableciendo** los límites del mandato presidencial y reconociendo los derechos de las personas LGBTQI+ tras recibir el poder de manos del expresidente Rafael Correa en 2017. Sin embargo, en 2019 el manejo de los problemas económicos por parte de su gobierno generó constantes reacciones negativas.

En marzo, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI, que otorgó un préstamo de 4.200 millones de dólares para hacer frente al déficit de Ecuador. Pero el costo fue elevado: como cabía esperar, las condiciones incluyeron la privatización de empresas públicas, la suspensión de ciertos servicios de educación y salud públicas y despidos masivos en el sector público. Al mes siguiente, centenares de personas **marcharon** en la capital, Quito, en contra del acuerdo. Algunos manifestantes estaban vinculados al expresidente Correa, ahora fuertemente opuesto a Moreno, su antiguo aliado, pero también marcharon grupos no identificados con ningún partido. A medida que la protesta se acercaba al palacio presidencial, recibió una repuesta cada vez más violenta: la policía empleó contra ella gases lacrimógenos y macanas, provocando heridas.

En julio la coalición Asamblea Nacional Ciudadana, que agrupa a diversos grupos sociales y sindicatos, convocó una **huelga nacional** de cinco días en protesta contra el paquete de medidas de austeridad. El gobierno estableció un proceso nacional de diálogo para intentar alcanzar consensos en temas económicos, sociales y políticos clave, pero algunos grupos, incluidos los vinculados a Correa, se negaron a participar.

El anuncio de otra serie de medidas económicas neoliberales de austeridad el 1º de octubre generó protestas persistentes. Esta vez el paquete incluía un recorte salarial del 20% en el sector público y la eliminación de los subsidios a los combustibles. El aumento a más del doble del precio de la gasolina generó masivas protestas, lideradas por los principales sindicatos, incluido el de transportistas, además de federaciones de estudiantes universitarios y grupos indígenas. Estos representaban a algunos de los sectores de la población más afectados por el aumento en el precio de los combustibles, y a los que menos podían costearlo. El 3 de octubre los estudiantes y los sindicatos de transportistas lideraron una huelga nacional en la que los manifestantes

colocaron barricadas y quemaron llantas, paralizando Quito y otra de las principales ciudades, Guayaquil. En el segundo día de protestas, el gobierno, utilizando una técnica similar a la empleada en Chile, declaró el **estado de emergencia**. Según se informó, alrededor de **370 personas** fueron arrestadas en los dos primeros días de la protesta.

El presidente Moreno parecía poco dispuesto a ceder, y afirmó que el gobierno no negociaría con “criminales”. Acusó a los manifestantes de intentar quebrar el orden constitucional y democrático. Alegó que el presidente Correa intentaba dar un golpe de estado y los acusó a él y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de **financiar** las protestas. Dejó claro que no tenía ninguna intención de dejar la presidencia. Tanto las acusaciones del presidente Moreno como la situación de la protesta amenazaban con salirse de control.

La huelga nacional y las protestas continuaron, con episodios de violencia y saqueos; en contraste, sin embargo, en Guayaquil miles de personas también participaron en una **Marcha por la Paz**, pidiendo el fin de la violencia. Tras dos días de acciones, los sindicatos de transportistas se retiraron de las protestas, pero los grupos **indígenas intensificaron** sus actividades, mayormente pacíficas, bloqueando carreteras en todo el país. Tres instalaciones de producción de petróleo fueron **ocupadas** por grupos de manifestantes, mientras que grupos indígenas tomaron el control de uno de los principales oleoductos. Los manifestantes indígenas también **detuvieron** a un grupo de oficiales de policía y periodistas en un centro cultural de Quito, como forma de protesta contra la fuerza policial excesiva; a la que responsabilizaron de la muerte del manifestante indígena Inocencio Tucumbí, quien según reportes había fallecido tras haber sido golpeado por una lata de gas lacrimógeno. Hubo algunos otros **casos** en que los manifestantes invirtieron los roles y detuvieron a oficiales de policía.

Se reportaron ataques contra periodistas, por parte tanto de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes; alrededor de 50 periodistas dijeron haber sufrido **agresiones** mientras cubrían las manifestaciones. El 8 de octubre la policía **allanó** la oficina de la estación de radio Pichincha Universal, acusándola de incitar a la discordia.

La disrupción causada por las protestas incrementó los precios de los alimentos y los combustibles, y en un acuse de recibo del alcance de los disturbios, la sede del gobierno fue temporariamente **trasladada** de Quito a Guayaquil. Los manifestantes intentaron **irrumper** en el edificio del parlamento y por un momento rompieron un cordón policial, pero retrocedieron después de

que la policía usara gases lacrimógenos. Según se informó, otros edificios gubernamentales sufrieron daños. En respuesta a ello, el 9 de octubre el presidente Moreno impuso un toque de queda nocturno.

La situación siguió deteriorándose. Junto a las protestas legítimas ocurrieron hechos de violencia criminal. En respuesta a ataques de manifestantes encapuchados a una estación de televisión, un periódico y la Contraloría General del Estado, el presidente Moreno **ordenó** el despliegue del ejército en las calles. Este tuvo la letalidad que era de esperar. El conteo inicial fue de cuatro personas muertas y alrededor de 650 detenidas. Sin embargo, la ONU, que envió un equipo de expertos que permaneció en el país entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre, recibió **reportes** de al menos 9 muertos durante las protestas, 1.507 personas heridas –incluidos 435 miembros de las fuerzas de seguridad– y 1.382 detenidas. La CIDH también **expresó** su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, incluido el uso indiscriminado de gas lacrimógeno. La población indígena parece haber sido un **blanco** específico de las fuerzas de seguridad.

Afortunadamente, luego de dos semanas de protestas, violencia y caos, ambos bandos se vieron en la necesidad de ceder. Como resultado de una negociación entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas

del Ecuador (CONAIE), con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el gobierno acordó hacer lo que el presidente Moreno había insistido que no haría: **restaurar** los subsidios al combustible y revertir los recortes. El gobierno también accedió a crear una nueva **comisión** con grupos de la sociedad civil y líderes indígenas para identificar medidas alternativas para hacer frente a las dificultades económicas del país. Los grupos indígenas cancelaron sus protestas, y los manifestantes que habían ocupado espacios en Quito comenzaron a **limpiar** sus sitios de protesta antes de retirarse.

El acuerdo sugiere que existen alternativas a la ortodoxia del FMI, pero que requieren un diálogo paciente y la voluntad de acercarse y escuchar las voces de las personas más afectadas por las medidas de austeridad; las personas más pobres y vulnerables no deben ser tratadas como un daño colateral de la reestructuración económica. El precio que se pagó antes de alcanzar el acuerdo –en muertes y detenciones, así como en términos de interrupción y costos económicos– fue elevado y pudo haberse evitado.

En lo que pareció ser una violación del espíritu del acuerdo, el gobierno continuó arrestando a políticos de la oposición que habían apoyado las protestas y abrió una **investigación** contra el líder de CONAIE Jaime Vargas. Sería más positivo enfocarse en promover la reconciliación, combinada con la decisión firme de



Manifestantes indígenas, entre ellos muchas mujeres, protestan ante la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador. Crédito: Jonatan Rosas/Anadolu Agency vía Getty Images

brindar reparaciones por las violaciones de los derechos humanos; el defensor del pueblo, Freddy Carrión, **anunció** la creación de una comisión especial para investigar los abusos de derechos perpetrados durante las protestas. Sin un enfoque de reconstrucción de relaciones y reparaciones por las violaciones, Ecuador podría estar muy cerca de un nuevo ciclo de protestas.

Muchos actores de la sociedad civil continuarán reclamando alternativas al neoliberalismo económico y a las políticas de austeridad impuestas desde el exterior. El 16 de octubre, en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI, 35 OSC de todo el mundo **firmaron** una declaración contra las políticas de austeridad respaldadas por el FMI, señalando la conmoción causada en Ecuador y en Haití (véase abajo), entre otros casos, y reafirmando la necesidad de respetar los derechos humanos y asegurar la participación de la sociedad civil y los grupos más afectados por las medidas económicas. En ausencia de estos cambios, cabe esperar que la disrupción observada en Ecuador se repita en otros lugares.

COLOMBIA: PROTESTAS MOTIVADAS POR RECORTES DE PENSIONES Y SALARIOS

Muchos de los manifestantes que se volcaron a las calles de Colombia en 2019 se inspiraron conscientemente en las protestas de Chile y Ecuador, posicionándose como parte de un movimiento **continental** más amplio y portando las banderas de dichos países junto con pancartas que rezaban “Sudamérica despertó”.

Las protestas colombianas aparecieron en los titulares cuando los sindicatos de trabajadores organizaron una **huelga nacional de 12 horas** el 21 de noviembre. No estuvieron solos; diversos grupos se unieron a las acciones de protesta, entre ellos grupos indígenas, de estudiantes y activistas anticorrupción. La participación fue amplia: si bien las cifras estimadas variaron ampliamente, al menos varios centenares de miles de personas, y posiblemente un millón, participaron en las **protestas** que se expandieron por todo el país el 21 de noviembre. Las manifestaciones continuaron en los días subsiguientes.

Abundaban las razones para el descontento. Mucha gente se movilizó en respuesta a informaciones de que el gobierno planeaba introducir medidas económicas de austeridad. Mucha gente protestó en contra de la **desigualdad económica**. Había mucha indignación a causa de la corrupción endémica. La gente también estaba molesta por un ataque aéreo reciente contra un

campamento de la guerrilla en el que habían muerto al menos ocho niños, así como por el intento inicial del gobierno de encubrir sus muertes.

Alexandra González Zapata, de la **Campaña Defender la Libertad**, señala que las protestas aprovecharon un descontento que se había ido acumulando gradualmente:

Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

En Colombia la indignación ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre.

También preocupaba la falta de avances en la implementación del **acuerdo de paz** firmado en 2016 por el gobierno y el principal grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el presidente Duque había ganado la elección de 2018 tras una campaña en oposición al acuerdo, y ha sido acusado de hacer muy poco por cumplirlo desde su llegada al poder. Muchas personas viven las consecuencias de un proceso de paz tambaleante, que incluyen la persistencia de altos niveles de violencia en las zonas rurales. Aún son necesarias muchas acciones para proteger los derechos de quienes expresan disenso y atacar la impunidad que prevalece ante los ataques: en lo que constituye un verdadero escándalo, **106 personas defensoras de derechos humanos** fueron asesinadas en Colombia en 2019, la mayoría en áreas rurales

y muchas de ellas **indígenas**. A principios de 2019 se habían producido protestas contra los altos niveles de violencia que padecen las personas defensoras de derechos y los líderes comunitarios y en demanda de mejor protección; los estudiantes, por su parte, habían marchado en septiembre **en contra de la corrupción**, en manifestaciones marcadas por la violencia.

Las protestas de noviembre fueron mayormente pacíficas, aunque hubo algunos casos de saqueos, así como vandalismo en estaciones del Transmilenio, el sistema de transporte rápido de la capital, Bogotá. Sin embargo, el gobierno tomó una posición de mano dura, generando choques violentos. Su respuesta inmediata a las protestas fue cerrar las fronteras y **desplegar** en las calles la asombrosa cantidad de 170.000 efectivos de las fuerzas de seguridad. En la tarde del 21 de noviembre algunos grupos intentaron asaltar el edificio del Congreso Nacional, al tiempo que se producían enfrentamientos cerca del aeropuerto internacional de Bogotá y en la Universidad Nacional de Bogotá. Videos subidos a las redes sociales mostraron las violentas acciones de los grupos antimotines, que **lanzaron gases lacrimógenos**, dispararon a quemarropa con cartuchos de gases lacrimógenos y golpearon a las personas en la cabeza. En Bogotá y en Cali se impusieron toques de queda nocturnos.

En desafío a los toques de queda y en repudio a la represión, se realizaron cacerolazos espontáneos en Bogotá y en otras ciudades. Los manifestantes erigieron barricadas. Más grupos se unieron a las protestas, entre ellos grupos de defensa de los derechos de las mujeres que reclamaban igualdad de género y grupos ambientales que hicieron un llamado urgente a la protección ambiental y la prohibición de la minería mediante fracturación hidráulica (*fracking*). Como relata Alexandra, las protestas persistieron en respuesta a los intentos del gobierno por descalificar y criminalizar a las movilizaciones:

Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

Sin embargo, la respuesta gubernamental de mano dura continuó. Los números de **detenidos** aumentaron; casi todas las personas detenidas lo fueron bajo argumentos cuestionables y con base a secciones poco claras del código policial, y se reportaron maltratos de las personas detenidas, además de un manejo violento de las protestas por parte de la policía. Nada de esto fue accidental, según describe Alexandra:

El 15 de noviembre, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones

“AL DÍA DE HOY NO SABEMOS CUÁL FUE EL PRIMER BARRIO O LA PRIMERA CUADRA QUE INICIÓ EL CACEROLAZO, PERO LO CIERTO ES QUE ESA DINÁMICA SE EXPANDIÓ, TRANSFORMANDO LA NARRATIVA HACIA UN DISCURSO PÚBLICO QUE PUSO DE RELIEVE LA INDIGNACIÓN CIUDADANA Y LOS RECLAMOS SOCIALES”

ALEXANDRA GONZÁLEZ ZAPATA



de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional.

Desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una movilización pacífica fue asesinado **Dilan Cruz**. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar.

Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de **Duvan Villegas**, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas

por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto número de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladadas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros está en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

Los sindicatos y grupos de estudiantes organizaron una segunda huelga nacional en protesta por la muerte de Dilan Cruz. En lo que pareció ser una respuesta conciliadora, el presidente Duque prometió iniciar una “conversación nacional”, mientras que su ministro de defensa anunció que se habían iniciado 11 investigaciones por “supuesta mala conducta” por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la oferta del gobierno se quedó corta ante las demandas de la gente, por lo que no sorprendió que las protestas continuaran durante diciembre, cuando se realizó una tercera **huelga nacional**. Ahora los

manifestantes también exigieron rendición de cuentas por la violencia ejercida en contra de las protestas anteriores. Alexandra presenta algunas de las demandas relacionadas con la represión policial de las protestas, así como algunos de los temas de fondo en torno de los cuales los manifestantes buscaban establecer un verdadero diálogo:

El gobierno debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. El gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité



Un grupo de estudiantes se refugia tras escudos improvisados durante las protestas antigubernamentales en Bogotá, Colombia. Crédito: Guillermo Legaria/Getty Images



Miembros de comunidades indígenas llevan una bandera whipala gigante en una protesta contra el gobierno en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2019.
Crédito: Diego Cuevas/Vizzor Image/Getty Images

Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

Los manifestantes solicitan el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde

a los ingresos reales de las personas, y a la derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad.

También reclaman que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. Y solicitan el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dilan Cruz.

Ambas partes se mantuvieron a distancia, y la indignación aumentó aún más en diciembre, cuando una joven que participaba en las protestas fue **capturada** por la policía antidisturbios y trasladada en un vehículo particular; solo fue liberada luego de que otras personas lo persiguieran. En un país donde el recuerdo de las desapariciones forzosas ocurridas en décadas recientes sigue muy presente, se trató de un hecho preocupante. La ciudadanía continuará exigiendo que el gobierno tome con seriedad sus reclamos e investigue adecuadamente los abusos cometidos durante las protestas.

CUBA: PROTESTAS ANTE LAS DIFICULTADES COTIDIANAS EN UN RÉGIMEN DE CONTROL TOTAL

Aun bajo un régimen basado en el control total, caracterizado por la total obstrucción del espacio cívico, pueden emerger descontentos. Las dificultades cotidianas que experimenta la mayoría de la gente en Cuba han motivado protestas que han podido encontrar algún espacio para desplegarse en la medida en que sus exigencias no fueran vistas como explícitamente políticas. **Juan Antonio Blanco**, del **Observatorio Cubano de Conflictos**, describe las tendencias recientes:

La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el Estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

El poder real está hoy ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

Juan Antonio explica las razones por las cuales las actitudes de mucha gente en Cuba han comenzado a cambiar, dando como resultado el aumento en las protestas:

Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. El agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura

del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. También colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

Los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el Estado.

El hecho de que hay mucha gente descontenta con sus condiciones económicas y sociales, junto con su capacidad para formular sus demandas en términos que no son vistos como una amenaza para el sistema de partido único, dan cuenta de su relativo éxito, concluye Juan Antonio:

El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

El disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

Cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población



Habitantes del barrio El Cerro, en La Habana, Cuba, reclaman la restauración de los servicios de agua y electricidad. Crédito: Observatorio Cubano de Conflictos

harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona

responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

HAÍTÍ: DESBORDE DE DESCONTENTO ANTE LA DESMESURA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción, una preocupación que también estuvo presente en Chile y en Colombia, fue un problema central en Haití, donde la sucesión de revelaciones escandalosas relativas al robo de grandes cantidades de fondos públicos reavivó las protestas y la violencia.

En el marco del programa venezolano Petrocaribe, lanzado en 2005 para construir apoyo regional para el gobierno izquierdista de Venezuela, Haití recibió petróleo a precios muy bajos, con pagos diferidos bajo términos muy generosos. El acuerdo –en la práctica un **préstamo de petróleo** en una época en que los precios del petróleo eran muy altos- supondría la liberación de miles de millones de dólares que el gobierno de Haití invertiría en el muy necesitado desarrollo, en programas sociales y en la reconstrucción tras el devastador terremoto de 2010. Pero el esquema brindaba muy pocas oportunidades de monitoreo y rendición de cuentas democráticas, y el pueblo de Haití nunca llegó a ver esos miles de millones. Daba la impresión de que el dinero terminó enteramente en los bolsillos de los políticos. Una estimación sugiere que al menos 2.000 millones de dólares –casi un cuarto del PIB de Haití- fueron malversados. Ahora el programa Petrocaribe ha sido desmantelado y Haití aún tiene una **deuda** con el gobierno de Venezuela, por casi el mismo monto que recibió, lo cual significa que la corrupción no solamente les ha robado a los haitianos su presente, sino que también amenaza con robarles su futuro: se ha desaprovechado una oportunidad histórica de progreso.

En el país más pobre del hemisferio occidental, la gente percibió una clara conexión entre las persistentes pobreza e inseguridad y la corrupción de las altas esferas, y por eso salió a las calles. La indignación por el escándalo de corrupción se convirtió en el punto de convergencia de años de frustraciones, entre otras cosas por la apropiación masiva de los fondos para la reconstrucción posterior al terremoto, la sucesión de elecciones fraudulentas, la restricción del espacio de la sociedad civil, la concentración de la riqueza en una pequeña élite y la ausencia de servicios básicos. El grito de protesta, en creole, fue “**Kot kob Petrokaribe?**” (“¿Dónde está el dinero del Petrocaribe?”).

Las protestas de 2019 fueron una continuación de las de **octubre y noviembre de 2018**, cuando las acusaciones de corrupción salieron por primera vez a la luz y se combinaron con el descontento de la ciudadanía frente a la elevada inflación y las propuestas del gobierno de incrementar los impuestos sobre

los combustibles como parte de las condiciones para acceder a un préstamo del FMI. Al igual que en Ecuador, la prescripción internacional de políticas económicas provocó resistencia, y la gente cuestionó porqué debían pagar ellos el precio, en vez de los políticos. El presidente Jovenel Moïse, que asumió el poder en 2017 tras una cuestionada elección con baja participación, fue acusado de bloquear toda acción encaminada a que funcionarios y políticos de alto rango respondieran por la corrupción. No se formularon acusaciones contra las personas presuntamente implicadas en el escándalo. La violenta respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas de 2018 dejó varios muertos, y a las protestas le siguió una huelga general. Tras las protestas de 2018, el gobierno abandonó sus planes de aumentar los impuestos sobre los combustibles y se comprometió a una auditoría oficial de los fondos; sin embargo, el descontento continuó en aumento.

Las protestas **resurgieron** en febrero de 2019, tras la publicación del primer informe oficial de auditoría. **Miles** de personas salieron a las calles a **exigir** la renuncia del presidente Moïse. Las protestas fueron acompañadas de violencia, saqueos y vandalismo contra vehículos propiedad de las élites adineradas, y se **reportó** la muerte de al menos siete personas. La policía llegó incluso a disparar **gases lacrimógenos** durante el funeral de dos de las personas asesinadas. Los disturbios dieron como resultado la **cancelación** de los eventos de carnaval, ya que toda celebración habría sido considerada inapropiada.

El 31 de mayo los auditores oficiales entregaron su segundo informe sobre el escándalo, que detalló la enorme magnitud de la corrupción: reveló que millones de dólares se habían desviado hacia Moïse antes de que se convirtiera en presidente. Si bien atribuyó parte de la pérdida de fondos al mal manejo y la negligencia –en sí mismos causa de escándalo-, el informe también encontró evidencia clara de malversación. Reportó que buena parte de los fondos continuaban sin ser completamente localizados. Como era de esperar, la publicación del informe impulsó más protestas.

Como en otros lugares, la **escasez** de combustibles contribuyó aún más al descontento. El suministro del Petrocaribe había terminado y algunas compañías petroleras se negaban a proveer combustible a causa de las cuentas impagas. Esto provocó la **intensificación** de las protestas a comienzos de septiembre. Los días 15 y 16 de septiembre muchas calles fueron **bloqueadas** por llantas quemadas y otros obstáculos en la capital, Puerto Príncipe, y en otras ciudades.

Frente al recrudecimiento de las protestas, el presidente Moïse llamó a la calma

y ofreció formar un gobierno de unidad entre varios partidos para ayudar a resolver la crisis. Esto ocurrió después de varios intentos de nombrar a un nuevo primer ministro que fueron bloqueados; desde que el anterior ocupante del cargo perdiera un **voto de censura** en marzo, Haití solo había tenido primeros ministros interinos. Pero dado que la oposición intentaba cada vez más aprovecharse de las protestas y muchos de los manifestantes exigían la renuncia del presidente, la oferta fue rechazada.

Las protestas se volvieron cada vez más violentas. El 27 de septiembre la policía usó **armas de fuego y gas lacrimógeno** para dispersar a la multitud en una de las protestas más grandes, en la que hubo saqueos e incendios intencionales. El 21 de octubre, **siete personas** recibieron disparos y resultaron heridas mientras colocaban una barricada; dos de ellas fueron hospitalizadas. Hubo abundantes evidencias de que las fuerzas de seguridad estaban usando **fuerza excesiva**. A comienzos de noviembre se reportó que **al menos 42 personas** habían sido asesinadas desde que las protestas se intensificaran a mediados de septiembre. Al mismo tiempo, hasta los oficiales de policía **protestaron** por no haber recibido sus salarios durante meses.

En esta agitada atmósfera, los trabajadores de los medios de comunicación quedaron en situación de riesgo. El 23 de septiembre, un fotoperiodista y un conductor resultaron heridos luego de que el senador Jean Marie Ralph Féthière **abriera fuego** mientras su vehículo intentaba atravesar una multitud de manifestantes a su salida del parlamento. El senador **alegó** haber actuado en defensa propia. El camarógrafo Edmond Joseph Agénor recibió un impacto de **arma de fuego** disparado por las fuerzas de seguridad mientras cubría una protesta en las afueras del aeropuerto de Puerto Príncipe el 30 de septiembre, pese a estar claramente identificado como integrante de un medio. Y el 10 de octubre, el reportero de radio Néhémie Joseph fue **hallado muerto** en su vehículo, con varios impactos de bala en la cabeza. Había denunciado amenazas de muerte por parte de políticos a causa de su cobertura de las protestas. El asesinato de Néhémie generó **más protestas** en las que miles de personas intentaron marchar hacia la residencia del presidente. Joseph fue el segundo periodista asesinado en Haití en 2019; el primero, el reportero de radio Pétion Rospide, que había cubierto con frecuencia el escándalo del Petrocaribe, **había sido acribillado** en junio.

Las protestas llevaron a Haití a la **parálisis**: el transporte quedó bloqueado, bancos y escuelas cerrados y muchas líneas de electricidad fuera de servicio.

Los niños y niñas no recibieron **educación** durante meses y la población enfrentó dificultades para acceder a servicios básicos de salud. En el caos aumentaron los crímenes cometidos por pandillas. La escasez de alimentos comenzó a empeorar como resultado de las interrupciones causadas por las protestas y la escasez de combustibles, que provocó un aumento de precios y la depreciación de la moneda. Muchas personas que ya vivían al límite fueron arrojados a una grave pobreza alimentaria; las organizaciones humanitarias estimaron que el **35%** de la población necesitaba asistencia alimentaria de emergencia, un reto que se volvía más difícil por los bloqueos de calles y la inseguridad: la crisis política y económica se había convertido en **emergencia humanitaria**. Muchas personas cruzaron la frontera hacia República Dominicana, contribuyendo al sentimiento anti-inmigrantes en un país en que uno de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2020 **promete** erigir un muro fronterizo al estilo Trump.

En diciembre pareció imponerse una tensa calma, debido quizás a que la indignación expresada en las protestas había sufrido un desgaste. Algunos niños y niñas **regresaron a la escuela**. Sin embargo, muchas barreras físicas eliminadas por la policía fueron rápidamente reconstruidas, y se planificaron más marchas de protesta. El país aún carecía de un primer ministro permanente y no parecía haber planes para realizar la elección parlamentaria correspondiente. Los políticos seguían en un callejón sin salida.

Al cabo de tanta agitación, nadie fue obligado a rendir cuentas por la enorme corrupción. No se recuperó nada del dinero y nadie fue a la cárcel. Como es de esperar, la indignación que desencadenó las protestas sigue estando allí. La gente merece respuestas y justicia, y continuará preguntando: “Kot kob Petrokaribe?”.



Carteles contra la corrupción adornan las paredes de Puerto Príncipe, Haití, en mayo de 2019. Crédito: Federico Ríos/Bloomberg vía Getty Images

ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA CRISIS DE LOS OPIOIDES

Otro terreno en que la gente desafió al poder económico en 2019 fue la crisis de los opioides. Cuando esta crisis llegó a los titulares, fue gracias al activismo de la sociedad civil, que puso el foco en quienes obtuvieron grandes ganancias mediante la producción y comercialización de drogas altamente adictivas, así como en la filantropía utilizada para **blanquear** su reputación. Al igual que las acciones de la sociedad civil para elevar el perfil de la crisis climática (*véase sección*), las tácticas empleadas combinaron la acción directa no violenta y la desobediencia civil con el litigio para obligar a los poderosos a rendir cuentas.

La crisis de los opioides es particularmente grave en los Estados Unidos, donde cada día **mueren 130 personas** por sobredosis de drogas. Durante 2018 unas **10,3 millones de personas** hicieron un uso indebido de opioides recetados. Esta adicción puede conducir al uso de drogas ilegales, incluidas la heroína, así como a la comisión de delitos para poder comprarlas. El costo de la crisis de opioides para los Estados Unidos ha sido **estimado** en más de 78 mil millones de dólares al año. El activismo de la sociedad civil y el periodismo de investigación han sacado a la luz la forma agresiva en que las drogas son comercializadas y el modo en que se incentiva a los médicos a recetarlas de forma inadecuada, pese a que se estima que los medicamentos solo son efectivos para **una de cada diez** personas que experimentan dolor crónico. Las tácticas utilizadas por las compañías farmacéuticas incluyen el financiamiento de grupos que dicen brindar apoyo a personas que experimentan dolor crónico debido a sus problemas de salud y reclaman el acceso a los opioides; se trata en realidad de **organizaciones de fachada** que buscan aumentar la demanda. Las investigaciones también arrojaron evidencia de intentos de engañar a la gente sobre la seguridad y el carácter adictivo de las drogas.

La principal droga en cuestión, OxyContin, es producida por Purdue Pharma, una compañía que es en su totalidad propiedad de la familia Sackler. La fortuna combinada de la familia se **estima** en más de 13.000 millones de dólares. Tal fortuna permite a los miembros de la familia Sackler posicionarse como generosos patrocinadores de reconocidas universidades e instituciones artísticas de todo el mundo. Así pues, la

marca Sackler es conocida por estudiantes y amantes del arte en Estados Unidos y el Reino Unido, quienes la asocian con valores positivos.

Pero lo que podría parecer una fortaleza -la canalización masiva de recursos económicos a través de la filantropía para proyectar una imagen positiva- también se convirtió en una debilidad, ya que el activismo se focalizó en las instituciones que recibían ese financiamiento, relacionándolas de manera negativa con la marca. De ese modo se unieron a una tendencia más amplia de la sociedad civil que critica el uso de financiamiento filantrópico para blanquear la reputación de quienes causan daño, como empresas que contribuyen al cambio climático y promueven el tabaco o están vinculadas con abusos de los derechos humanos.

En febrero el Museo Guggenheim de Nueva York, Estados Unidos fue **paralizado** por una protesta **iniciada** por la conocida fotógrafa y activista Nan Goldin luego de que el museo aceptara una donación de los Sackler. Goldin, ex adicta a los opioides recetados, fundó junto a otros activistas un grupo, *Prescription Addiction Intervention Now* (**PAIN**, que significa “dolor”, por sus siglas en inglés), para denunciar a las instituciones financiadas por los Sackler. Goldin cayó en la cuenta de que en el pasado había recibido pagos por su trabajo por parte de galerías financiadas por los Sackler, y que había utilizado el dinero para comprar drogas en el mercado negro para mantener su adicción.

En 2019, la estrategia comenzó a dar resultados en el Reino Unido, que según PAIN ocupa el tercer lugar en el uso creciente de opioides. En febrero, Nan Goldin afirmó que se **negaría** a realizar una exhibición retrospectiva de su obra en la National Portrait Gallery de Londres si el museo aceptaba una donación de un millón de libras esterlinas (unos 1,3 millones de dólares) de la familia Sackler. Al mes siguiente, la galería dijo que había acordado con el Fondo Sackler **no proceder** con la donación. El grupo de galerías Tate, también con sede en el Reino Unido, afirmó posteriormente que ya no aceptaría donaciones de la familia Sackler; la galería Tate Modern tenía planes de hacer una exhibición de la obra más importante de Nan Goldin. Como respuesta, tanto el Fondo Sackler como una fundación de la familia Sackler **suspendieron** todas las donaciones. El Prince's Trust, una organización caritativa del Reino Unido asociada con la monarquía, **afirmó** que no tenía planes de aceptar más donaciones de los Sackler, al igual que el Guggenheim de Nueva York.

La campaña continuó. En julio, Nan Goldin **protestó** en París, Francia, fuera del Museo Louvre, que tiene un ala patrocinada por los Sackler. En agosto, Goldin y otras personas activistas fueron detenidas luego de **protestar** en contra de la inacción del gobernador de Nueva York ante las muertes provocadas por drogas. En noviembre, Goldin lideró una protesta **haciéndose la muerta** en el recién construido jardín del Victoria and Albert Museum de Londres, patrocinado por los Sackler.

Mientras tanto, otros grupos estaban activos: padres de familia que perdieron a sus hijos e hijas por la adicción a los opioides **crearon grupos** para promover cambios en las leyes. Pequeños grupos en todo Estados Unidos **se unieron** en la *Fed Up Coalition* para reclamar más acciones de Purdue Pharma para mitigar los efectos de los opioides. También llamaron al gobierno de los Estados Unidos a actuar con más fuerza ante la crisis y enfrentar a las compañías farmacéuticas, buscando desafiar la cercana y cálida relación que volvía el ambiente tan permisivo para los opioides.

Además de emplear acciones directas para posicionar el tema en la agenda pública, las personas afectadas se movieron en los tribunales. En marzo, Purdue Pharma **alcanzó un acuerdo** para resolver una demanda del estado de Oklahoma en relación con la comercialización agresiva e ilegal de OxyContin, sin embargo, continuó enfrentando **más de 2.000 demandas** en todo Estados Unidos. En marzo, el estado de Nueva York **demandó** a la familia Sackler por su responsabilidad en la crisis. En septiembre, al menos 20 estados **rechazaron** un acuerdo provisional de miles de millones de dólares con Purdue Pharma. A diferencia de su compañía, la familia Sackler hasta ahora ha logrado evitar las demandas, aunque hay acciones de activismo legal en curso para intentar desafiar su impunidad. Incluso la bancarrota y la reconversión de Purdue Pharma, propuestas como una forma de resolver las demandas, dejaría una **inmensa fortuna** en manos de la familia.

Otros fabricantes también han sido blanco de acciones. En agosto, Oklahoma se convirtió en el primer estado en demandar con éxito a un fabricante

de opioides, **estableciendo** el precedente de que las farmacéuticas son responsables por la adicción y las muertes. Johnson & Johnson debió pagar más de **500 mil millones de dólares** por difundir información falsa sobre los analgésicos y violar las leyes estatales de protección del consumidor al no divulgar los riesgos. Dos meses después se ordenó a otra de las principales compañías farmacéuticas, Teva Pharmaceuticals, junto a tres distribuidores de medicamentos, **pagar** 260 millones de dólares para resolver miles de demandas de comunidades de todo el país.

Mientras la crisis de los opioides está quedando en evidencia en los Estados Unidos y el Reino Unido, también ha comenzado a expandirse a otros lugares. Purdue Pharma, por ejemplo, tiene compañías subsidiarias en Asia, Europa y Latinoamérica. Y al igual que lo han hecho las compañías productoras de tabaco, parecería que la respuesta al endurecimiento de la regulación en las economías del norte global ha sido la apertura de nuevos mercados en el sur global. La crisis de los opioides está ahora **impactando a la India**, donde las **compañías farmacéuticas** están sacando ventaja de la menor regulación del mercado y la falta de controles sobre el sistema de salud. Han comenzado a **surgir** clínicas privadas para el dolor y existe evidencia de que, una vez más, las farmacéuticas están buscando ganar influencia entre médicos y académicos importantes para obtener acceso e impulsar la demanda.

Las acciones continuarán, con demandas para que las instituciones no solo dejen de aceptar financiamiento de los Sackler, sino que retiren su nombre, y acaben con las asociaciones positivas entre la marca y los espacios de cultura y aprendizaje. Se afirma el reclamo de que, en vez de financiar galerías de arte, su filantropía se utilice para financiar centros de tratamiento y prevención de la adicción a las drogas. Los activistas también continuarán exigiendo que aquellos cuyo liderazgo contribuyó a crear la crisis de los opioides se enfrenten a la justicia penal. Su inmenso poder económico no debe seguir protegiéndolos de las consecuencias del daño que han causado.

LÍBANO: IMPUESTO AL WHATSAPP GENERA DEMANDA DE CAMBIO RADICAL

Un incremento de precios de otra naturaleza fue la razón de la última ronda de protestas desatada en el Líbano el 17 de octubre. Según se informó, el gobierno planeaba introducir un nuevo **impuesto** al uso de WhatsApp; se desataron protestas que fueron una continuación de las que habían tenido lugar en septiembre a causa del **deterioro** de las condiciones económicas. Las protestas rápidamente generaron cuestionamientos sobre la forma en que se gobierna el Líbano, los intereses a los que se sirve, y la clase de futuro que el país puede ofrecer a sus jóvenes.

Las protestas de octubre evidenciaron lo esencial que se ha vuelto para la vida cotidiana la comunicación telefónica móvil rápida, particularmente en ausencia de otra infraestructura. La comunicación y el acceso a internet son considerados como derechos humanos; un nuevo impuesto sobre su uso sería visto por muchas personas como una restricción flagrante de sus derechos. WhatsApp es también una plataforma clave para la coordinación de las protestas, incluidas las de 2019. La decisión reactivó la preocupación sobre las restricciones de la libertad de expresión, cuestión en que el gobierno tiene algunos antecedentes: en 2019, por ejemplo, las autoridades **presentaron demandas** contra periodistas críticos y activistas y bloquearon una aplicación de citas.

Adicionalmente, estaban presentes en el Líbano muchas de las condiciones subyacentes observadas en otros contextos de protestas masivas durante 2019: alto desempleo, particularmente entre los jóvenes, y aumentos en los precios del pan y los combustibles. En 2018 la crisis económica y el déficit presupuestario en aumento habían llevado al gobierno a solicitar un préstamo de 10.200 millones de dólares del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el gobierno de Arabia Saudita y el Banco Mundial, bajo la condición de reducir su déficit aumentando sus ingresos por impuestos. Al igual que en Ecuador y Haití, las políticas económicas dictadas desde el exterior fueron implementadas con poca consideración por su impacto sobre la vida cotidiana de la gente.

Las protestas también fueron precedidas por una serie de **incendios forestales**, que el gobierno **no pudo** controlar debido a la falta de mantenimiento adecuado de los equipos. Ello lo obligó a depender del apoyo internacional; para muchas personas, se trató de un símbolo de la disfunción del Estado, incapaz de cumplir su deber de proteger el territorio y a sus habitantes. No era la primera vez que la

ciudadanía libanesa había sido impulsada a protestar por la incompetencia de su gobierno: en 2015, la acumulación de basura en las calles había provocado la erupción del movimiento “**Tú Apestras**”, que protestó contra la corrupción y la incompetencia política. Estos mismos temas se volvieron dominantes en 2019. A medida que las protestas para expresar el descontento de la gente en relación con la **corrupción** y la desigualdad crecían, la gente **comparaba** la riqueza de las élites con su desmejorada situación económica.

Ziad Abdel Samad y Zahra Bazzi, de la **Red de ONG Árabes para el Desarrollo**, identifican las principales raíces económicas y políticas de las protestas, así como el modo en el que la gente rápidamente pasó a demandar cambios radicales:

Las protestas fueron motivadas por las repercusiones directas que la crisis económica y monetaria había tenido sobre la población libanesa, pero tenía raíces profundas en un sistema económico fallido, prácticas políticas malintencionadas y la corrupción practicada durante décadas por sucesivos gobiernos.

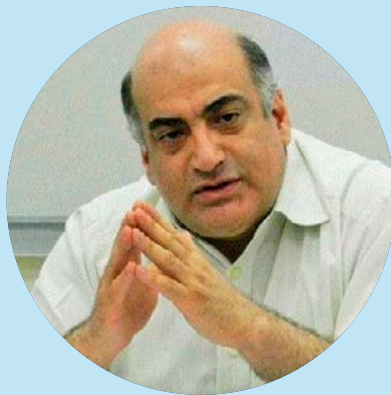
Durante los meses previos al surgimiento de la revolución, la crisis económica se volvió inminente, con un aumento en la deuda pública y una cuestionable reingeniería monetaria y financiera acompañadas de la contracción del PIB, así como del aumento del desempleo, que afectó a aproximadamente 16% de la población general, y a más del 45% de la gente joven, la pobreza creciente y el aumento de los precios de los bienes básicos.

Una semana antes de las protestas, se comenzaron a ver señales claras de una crisis financiera, como protestas en estaciones de gasolina e incapacidad del gobierno de acceder a nuevos créditos para la importación de trigo y otros bienes básicos, a lo que se sumó el inicio de casi 100 incendios forestales en el país.

Tras la tardía adopción del presupuesto de 2019 en julio, las negociaciones por el presupuesto 2020, que estaban siendo concluidas en octubre, evidenciaron la clara intención de aumentar los ingresos del gobierno a cualquier costo y reducir el enorme déficit, del 11%, para escapar a la crisis. La reunión de gabinete realizada el 17 de octubre sugirió una serie de nuevas medidas de austeridad que incluía impuestos directos, sin imaginar el descontento de la población libanesa y las masivas protestas que se generarían en el país ese mismo día.

“EN LA MEDIDA EN QUE SUPERARON SUS DIVERGENCIAS RELIGIOSAS Y POLÍTICAS Y UNIERON FUERZAS PARA LOGRAR UN CAMBIO REAL, LOS LIBANESES CREARON EL MOVIMIENTO CIVIL MÁS MASIVO DE LA POSGUERRA EN EL LÍBANO”

ZIAD ABDEL SAMAD
Y ZAHRA BAZZI



Los manifestantes compartían una visión clara y demandas sobre el sistema político y económico que quieren alcanzar: la renuncia del gobierno, la formación de un nuevo gobierno conformado por personas independientes de los partidos en el poder y la realización de elecciones parlamentarias democráticas basadas en una nueva ley electoral democrática. Además, hubo demandas de que se aprobara una ley sobre la independencia del sistema judicial y se tomaran medidas para la recuperación de activos y otras exigencias socioeconómicas.

Las protestas se multiplicaron a partir del 17 de octubre, cuando la ira de la gente aumentó luego de que el guardaespaldas de un ministro **disparara** al aire para dispersar a unos manifestantes que bloqueaban su vehículo. A causa del aumento de las protestas, al día siguiente el gobierno cerró escuelas y universidades, y se reportó que cientos de personas fueron **arrestadas**. Al final del día, el gobierno **anunció** que daba marcha atrás con su propuesta del impuesto sobre WhatsApp.

Pero las protestas continuaron, ya que el descontento excedía con creces ese impuesto. Cada vez más, los manifestantes apuntaron su ira contra el sistema de gobernanza del Líbano, de estructura sectaria, donde los puestos principales son asignados a personas de diferentes grupos religiosos y los principales partidos políticos se estructuran sobre la base de líneas religiosas. Es un sistema que, al tiempo que busca evitar el conflicto religioso, permite de manera implícita el clientelismo e impide la rendición de cuentas. Produce gobiernos fragmentados con tendencia al inmovilismo político, como se refleja en la incapacidad de realizar elecciones parlamentarias entre 2009 y 2018. Ha opuesto resistencia a los intentos de reforma, porque los partícipes del sistema se benefician de él y no desean cambiarlo. Sin embargo, mucha gente ahora siente que los partidos y posiciones sectarias no los convencen ni abordan sus prioridades.

Las protestas exhibieron su repudio al sectarismo mediante la movilización de personas de **diferentes identidades**, unidas simplemente por el hecho de ser libanesas. La gente exigió su derecho a una identidad no sectaria, ondeando la bandera libanesa en vez de pancartas sectarias. El mensaje fue que no aspiraba a logros solo para su grupo de pertenencia, sino que quería cambios que beneficiaran a todos.

Ziad y Zahra confirman la importancia del carácter no sectario de las protestas:

Las protestas se extendieron por todo el país. Son descentralizadas y se mantienen no sectarias. En la medida en que superaron sus divergencias religiosas y políticas y unieron fuerzas para lograr un cambio real, los libaneses crearon el movimiento civil más masivo de la posguerra en el Líbano. Este cambio había sido largamente esperado, particularmente por la sociedad civil, que por años ha intentado promover alianzas e involucrarse en la formulación de políticas a diferentes niveles, pese a la falta de canales serios y efectivos para ello. Aunque el término “revolución” ha sido cuestionado por muchos, manifestantes y activistas, entre otros, han insistido en designar así al proceso.

La revolución ha incrementado la conciencia popular, lo cual se ha reflejado en miles de iniciativas y discusiones. Han tenido lugar protestas descentralizadas en todas las ciudades y pueblos, del extremo sur a los extremos norte y este, y fueron incluidos todos los grupos sociales y gente de todas las edades.

Esta revolución diversa e inclusiva ha contribuido a romper el rígido discurso sectario y el discurso político regional, alterando lealtades tradicionales y rompiendo barreras entre grupos sociales y regiones.

Demostrando su descontento ante la disfunción política y el sectarismo, los manifestantes realizaron actos de vandalismo en las oficinas de varios partidos políticos y en la noche del 18 de octubre intentaron ingresar a la sede del gobierno y fueron dispersados con gases lacrimógenos. Los manifestantes colocaron barricadas y quemaron llantas. Las protestas crecieron, y durante el fin de semana del 19 y 20 de octubre más de un millón de personas **salieron** a las calles en diferentes ciudades del Líbano. Se realizaron **protestas en solidaridad** en diversas ciudades de todo el mundo. El 21 de octubre se realizó una huelga general.

En respuesta a la huelga, el gobierno **ofreció** un paquete económico que combinaba propuestas de cambios en los salarios de los políticos con la promesa de más apoyo para las personas en situación de pobreza. Pero esto no calmó la ira de los manifestantes. Alrededor de 60 grupos, muchos de ellos de la sociedad civil, incluidos los que se habían formado durante las protestas de 2015, continuaron **coordinando** su activismo. El 27 de octubre, miles de personas formaron una **cadena humana** de 170 kilómetros a lo largo del país, como un símbolo de la unidad de los manifestantes. La gente exigía la renuncia del primer ministro Saad Hariri y de su gabinete, pero avanzó más allá y comenzó a exigir también la remoción de toda la clase gobernante del país y su sustitución por un nuevo gobierno tecnocrático y de base amplia que abordara los problemas económicos del país; así, plantearon un desafío a los intereses de todos los grandes partidos, beneficiarios del sistema vigente.

Las protestas tuvieron impacto: el 29 de octubre el primer ministro Hariri anunció su **renuncia**, provocando celebraciones entre los manifestantes. El 21 de octubre el presidente Michel Aoun, que había mantenido un bajo perfil durante las protestas, prometió nombrar un gobierno formado por especialistas. Se alcanzó el **compromiso** de que el parlamento debatiría las leyes propuestas por la sociedad civil, incluidas las referidas a la corrupción y la seguridad social.

Las protestas sin duda habían logrado un impacto, pero sin embargo continuaron. Miles de personas se movilizaron para exigir un gobierno completamente nuevo, realmente libre de vínculos partidistas, así como nuevas elecciones de carácter no sectario y nuevas leyes para combatir la corrupción. Decenas de miles de personas protestaron durante el **“domingo de unidad”**

el 3 de noviembre. El acostumbrado inmovilismo y la usual negociación entre cuatro paredes parecieron volver a imponerse durante la elección del primer ministro y la formación del nuevo gobierno; sin embargo, los manifestantes **rechazaron** los nombres propuestos para reemplazar al primer ministro. En un nuevo **impulso**, los manifestantes erigieron numerosas barricadas cuando el presidente Aoun afirmó que las personas debían “emigrar” si no estaban contentas con las opciones disponibles. Los rumores de que el gobierno aprobaría una ley de amnistía para proteger a los políticos de ser procesados por corrupción también alimentaron la indignación.

La inestabilidad generada por las protestas, y en particular las barricadas, redujeron el suministro de combustibles y resultaron en escasez de medicamentos; asimismo, los bancos se mantuvieron cerrados por largos periodos. En ocasiones, los manifestantes experimentaron respuestas violentas. El 18 de octubre **se usaron** contra ellos gases lacrimógenos y balas de goma, y el 26 de octubre el ejército los manifestantes que se negaban a despejar las calles fueron enfrentados por el ejército; varias personas resultaron **heridas** luego de que los efectivos dispararan al aire. El 12 de noviembre, las protestas se cobraron su primera víctima: el activista pacifista Alaa Abou Fakhr, aparentemente muerto por una **bala** disparada por un soldado para dispersar a la multitud. Los días 14 y 15 de diciembre la violencia se agudizó, cuando las **fuerzas de seguridad** usaron balas de goma, gases lacrimógenos, macanas y cañones de agua contra los manifestantes en la capital, Beirut, dejando **decenas** de heridos.

Los manifestantes también enfrentaron violencia de parte de algunos seguidores de partidos políticos. El 29 de octubre, seguidores del Movimiento Amal y de Hezbollah, ambos partidos musulmanes chiitas que forman parte del gobierno, **atacaron** a los manifestantes que ocupaban una de las calles principales y destruyeron las tiendas de campaña utilizadas por los manifestantes durante una ocupación de dos semanas de la Plaza Martyr de Beirut. La policía fue acusada de hacer poco para detener el ataque inicial. En noviembre hubo otros **choques violentos** entre los seguidores de Amal y Hezbollah y los manifestantes. Los seguidores de estos partidos también **atacaron** a los equipos de televisión que cubrían las protestas, y se reportaron ataques contra mujeres periodistas.

Ziad y Zahra relatan otros casos de violencia:

Desde el primer día del alzamiento, los partidos políticos y varios elementos del régimen se sintieron amenazados por el cambio urgente



Las mujeres se interponen entre la policía antidisturbios y los manifestantes en una protesta en Beirut, Líbano, el 19 de octubre de 2019. Crédito: Sam Tarling/Getty Images

que exigían los manifestantes, que pondría en peligro el poder que han mantenido por décadas. Reaccionaron a esto haciendo uso de fuerza excesiva, gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones arbitrarias y arrestos, especialmente después de diciembre.

Desde el inicio de las protestas, se cometieron muchas violaciones de los derechos humanos de los manifestantes. El 23 de noviembre, cinco jóvenes –incluidos dos menores– fueron arrestados y detenidos por las fuerzas de seguridad por retirar un cartel perteneciente a un partido político. El mismo día, seguidores de los movimientos Amal y Hezbollah se enfrentaron de forma violenta con los manifestantes pacíficos en Beirut y otras regiones. La violencia aumentó, hecho que fue firmemente **condenado** por expertos de la ONU y relatores especiales, quienes llamaron al gobierno libanés a respetar el derecho a la libertad de expresión y a proteger a los manifestantes.

La postergación de las consultas parlamentarias del 9 al 16 de diciembre, y nuevamente al 19 de diciembre, estuvo acompañada por un aumento de la violencia y enfrentamientos entre los manifestantes, seguidores de líderes políticos, las fuerzas de seguridad y el ejército. Los choques más violentos se registraron entre el 10 y el 16 de diciembre: el 10 de diciembre, los manifestantes hicieron un recorrido en sus vehículos frente a las casas de exministros de obras públicas e infraestructura, denunciando la deficiente infraestructura que había ocasionado enormes inundaciones en las principales calles y carreteras, manteniendo a los ciudadanos en sus vehículos durante horas. Los manifestantes fueron atacados ferozmente por hombres con el uniforme de las Fuerzas de Seguridad Internas, vinculados con algunos partidos políticos. Se destruyeron vehículos, y manifestantes y periodistas fueron sacados de ellos a rastras y golpeados indiscriminadamente.

En las noches del 14 y el 15 de diciembre, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a seguidores de partidos políticos que les habían provocado y atacado de diferentes formas. Las fuerzas de seguridad también atacaron de forma arbitraria a

los manifestantes reunidos en Beirut, lanzándoles gases lacrimógenos y balas de goma. Estos dos días de violencia terminaron con el arresto de 23 personas, algunas de las cuales mostraron, tras su liberación, señales de haber sido torturadas. Más de 76 manifestantes reportaron haber sufrido algún tipo de ataque, ya sea por parte de los oficiales de seguridad o como resultado de las balas de goma disparadas en su contra. En los casos más severos, algunos reportaron haber sido arrastrados al interior del edificio del parlamento y golpeados por las fuerzas de seguridad. Algunos reportaron el robo de dinero, documentos legales o teléfonos.

La violencia continuó hasta la noche del 16 de diciembre, cuando las personas reunidas en plazas de Beirut y en el sur fueron atacada por seguidores de los partidos políticos, quienes quemaron sus tiendas de campaña y vehículos.

Los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y la policía antidisturbios fueron particularmente intensos durante los ataques de los manifestantes contra los bancos, y durante las protestas e intentos de retirar las inmensas barreras de contención colocadas ilegalmente frente al parlamento, y más recientemente frente al Palacio de Gobierno.

El 15 de enero de 2020 cientos de personas se reunieron frente a un centro de detención para exigir la liberación de los manifestantes arbitrariamente detenidos, y la policía antidisturbios respondió con fuerza excesiva, incluido el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos. La policía antidisturbios apuntó deliberadamente contra periodistas y reporteros de TV. Se filtraron imágenes que mostraban a las fuerzas de seguridad golpeando a los detenidos mientras los transportaban a un centro de detención. Algunos de los detenidos compartieron relatos de tortura y abuso al interior de los centros de detención.

Estadísticas recientes publicadas por el Comité de Abogados por la Defensa de los Manifestantes en el Líbano mostraron que entre el 17 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020, alrededor de 906 manifestantes fueron arrestados y detenidos, incluidos 49 menores y 17 mujeres. Aproximadamente 546 manifestantes sufrieron violencia durante las protestas o en los centros de detención.

Sin embargo, pese a la creciente violencia, la gente siguió manifestándose. El 6 de noviembre las mujeres **marcharon** en Beirut para reclamar por sus derechos, y demandaron reconocimiento por el rol que habían desempeñado

en las protestas. En diciembre se realizó una marcha contra el acoso sexual. Los estudiantes, de presencia destacada en las protestas, también se manifestaron el 6 de noviembre, demandando cambios en las cuotas escolares y el fin del sectarismo y el nepotismo que caracterizan al mercado laboral. La sociedad civil organizó un **desfile civil** el Día de la Independencia, 22 de noviembre, que abarcó transversalmente a la sociedad libanesa, incluidos miembros de la diáspora, en abierto contraste con el desfile militar oficial, que requería de invitación para participar.

Ziad y Zahra señalan la amplia participación de las mujeres y las personas jóvenes, así como de las OSC, en tanto que carácter distintivo y fuerza fundamental de las protestas:

Si bien las mujeres en el Líbano han estado al frente en todos los momentos políticos importantes en nuestro país, han estado particularmente activas durante la revolución. Las consignas y demandas por los derechos de las mujeres han sido claras y evidentes y han incluido el derecho a transmitir la ciudadanía a sus familias, una ley de derechos civiles y protección ante la violencia. En grupos o de forma individual, las mujeres formaron escudos humanos al frente de las protestas para evitar la violencia, lideraron marchas y organizaron discusiones sobre los problemas de las mujeres.

Fuera de Beirut se organizaron marchas feministas y de mujeres. Se trató de acciones audaces poco corrientes antes de la revolución. Las feministas también se relacionaron críticamente con consignas relativas a la revolución y pusieron su discurso sobre la mesa. Lograron llamar la atención sobre las numerosas connotaciones patriarcales de las consignas, incluso las contenidas en el himno nacional. Además de trabajar activamente junto a los hombres, y en ocasiones solas, cerrando calles y ocupando plazas y espacios públicos, las mujeres cocinaron y distribuyeron alimentos para apoyar a manifestantes y ocupantes, e iniciaron campañas permanentes de limpieza y reciclaje. Más importante aún, en muchas ocasiones formaron una barrera entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad para minimizar los enfrentamientos.

La revolución también fue testigo de la muy activa participación de la gente joven y los grupos juveniles. Estos constituyeron la columna vertebral de las protestas, debido a que las personas jóvenes han querido por años formar parte de la toma de decisiones y la vida política. En el Líbano, las personas menores de 21 años no pueden

votar en las elecciones parlamentarias y municipales, pero aun así lograron un espacio de participación en esta revolución y lograron que sus voces fueran escuchadas. Y las voces y preocupaciones de los jóvenes durante las protestas fueron muy fuertes. A la gente joven le preocupaba especialmente el desempleo, la inmigración y la fuga de cerebros y presentó demandas audaces, reclamando el fin del régimen y el reemplazo de todos sus líderes políticos, sin excepción, seguido del establecimiento de un sistema secular que promueva la justicia social y la igualdad de género.

La revolución ha sido una oportunidad para reactivar el movimiento estudiantil en el Líbano. Los clubes de estudiantes de universidades privadas participaron ampliamente en las protestas, dentro y fuera de los campus, marchando desde las universidades hacia los principales sitios de protesta, e incluso instalando sus propias carpas en el centro de Beirut.

Los estudiantes más jóvenes también tuvieron un rol en la revolución. Junto a los grupos de estudiantes universitarios, tomaron parte de acciones de desobediencia civil y huelgas generales. Los estudiantes cerraron sus escuelas y universidades y protestaron frente al Ministerio de Educación y otras oficinas de la administración pública durante varios días. El 6 de noviembre, al tiempo que se conmemoraba el Día del Estudiante, estudiantes en todo Líbano se rebelaban por un futuro mejor. Un cartel que llevaba un estudiante lo dijo todo: “El día de hoy no voy a aprender historia, voy a escribirla”.

Las OSC tuvieron un rol importante en la revolución, que se ha beneficiado de su conocimiento acumulado, sus habilidades para la comunicación y su capacidad de organización. La mayoría de estas organizaciones participaron en las protestas desde el primer día, pero su rol fue más allá de protestar. Las OSC están liderando la coordinación de las protestas y organizando diariamente discusiones en las diferentes plazas en Beirut y otras regiones. Estas reuniones abordan temas de política, leyes, políticas socioeconómicas y derechos humanos. Abordan las preocupaciones de la gente y aseguran la disponibilidad de soluciones y alternativas. La participación en las discusiones ha aumentado de forma constante y ha involucrado a una variedad de sectores sociales, incluidos la juventud, las mujeres, el sector privado, la academia y el sector estudiantil.

Dado el sostenido compromiso de participación de la gente y el carácter

radical de las soluciones que exigía, no resultó sorprendente que las protestas **continuaron durante 2020**, al igual que el uso de **fuerza excesiva** por parte de las fuerzas de seguridad. El 21 de enero de 2020, luego de meses de negociación, Hassan Diab asumió el cargo como primer ministro del Líbano, con un nuevo gabinete al que presentó como tecnocrático. Sin embargo, mucha gente no lo vio así y, en cambio, consideró que persistía la influencia de los partidos sectarios. En consecuencia, continuó demandando un gobierno verdaderamente tecnocrático, nuevas elecciones no-sectarias y acciones reales contra la corrupción. Hasta ahora estas demandas no han sido atendidas, ya que la clase política parece estar intentando restablecer su hegemonía; sin embargo, no parece que esta nueva generación de manifestantes vaya a quedarse en silencio.



La ciudadanía libanesa protesta contra las crecientes dificultades económicas el 29 de septiembre de 2019. Crédito: Hussam Chbaro/Anadolu Agency vía Getty Images



La gente protesta contra el desempleo y la corrupción en Bagdad, Irak, el 7 de octubre de 2019. Crédito: Murtadha Sudani/Anadolu Agency vía Getty Images

IRAK: EL PRECIO MORTAL DE UN ESTADO QUE SE NIEGA A ESCUCHAR

Las personas jóvenes también se destacaron durante las masivas protestas antigubernamentales en Irak a finales de septiembre, movilizadas por demandas de empleo y servicios públicos, y por la indignación frente a la corrupción. En un país rico en petróleo donde el desempleo juvenil alcanzaba el 22%, las personas jóvenes pusieron una mayor exigencia sobre su gobierno.

En años recientes las **personas jóvenes** en Irak han formado nuevos movimientos sociales y de protesta. Estos combinaron demandas de justicia económica con demandas de democracia, exigieron el levantamiento de las restricciones impuestas por los líderes religiosos, y denunciaron a un sistema que les estaba fallando dado que les negaba la posibilidad tanto de trabajar como de tener influencia sobre las decisiones. Los movimientos juveniles rechazaban la división sectaria que ha atormentado a Irak desde el fin del dominio del partido Ba'ath; al igual que en el Líbano, las protestas reunieron a la gente más allá de dichas divisiones. La gente también protestó contra el rol preponderante del vecino Irán en la gobernanza de Irak. En efecto, como parte de su persistente guerra fría con Arabia Saudita por la supremacía regional, Irán ha expandido su ámbito de influencia hacia el oriente.

Estas preocupaciones no se expresaron por primera vez en septiembre. La gente se había manifestado pacíficamente por los mismos problemas vitales, incluidos problemas cotidianos de suministro de agua, en **julio de 2018**. La respuesta del Estado a las protestas de 2018 fue todo menos pacífica, y un año después la historia se repitió. El 25 de septiembre en la capital, Bagdad, las fuerzas de seguridad usaron **cañones de agua** para dispersar una protesta liderada por jóvenes contra la inacción del gobierno ante el desempleo que enfrentan los jóvenes tras finalizar sus estudios universitarios. Las plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería fueron desactivadas.

A medida que continuaron las protestas, la violenta respuesta estatal se **intensificó**. Para principios de octubre, las fuerzas de seguridad disparaban **armas de fuego**. En varias ocasiones dispararon armas de fuego directamente contra las multitudes en vez de al aire, y usaron contra los manifestantes granadas de aturdimiento, cañones de agua con agua caliente y gases lacrimógenos. En al menos dos ocasiones, vehículos blindados atropellaron a manifestantes. Varios reportes confirmaron que francotiradores apostados en lo alto de los edificios circundantes disparaban a matar a los manifestantes.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que no se trataba de fuerzas de seguridad; se cree que eran **grupos de milicia armados** que operaban con impunidad, con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad.

No es de extrañar que el número de víctimas fatales aumentara. De acuerdo con la **Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak**, hasta la medianoche del 6 de octubre el número de muertes registradas, incluidas tanto las de manifestantes como las de miembros de las fuerzas de seguridad, fue de 103, además de 4.035 personas heridas. La misma fuente contabilizó 814 personas arrestadas, más de 300 de las cuales habían quedado detenidas. Entre los detenidos se contaban varias prominentes personas defensoras de derechos humanos.

Debido a los rumores que circulaban de que el gobierno tenía una **lista** de personas que iban a ser arrestadas, numerosos destacados defensores de derechos humanos y periodistas se escondieron. Los periodistas se volvieron el **objetivo** debido a su cobertura de las protestas, y las autoridades aumentaron las restricciones contra la prensa; asimismo personas enmascaradas y armadas **saquearon** varios medios de comunicación, en un claro intento de evitar que se diera publicidad a las protestas y de disipar el ímpetu alcanzado. Un coalición de 18 organizaciones de derechos humanos e incidencia **urgieron** al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a realizar un debate urgente sobre la crisis de derechos humanos en Irak.

El 3 de octubre el gobierno impuso **toques de queda** en Bagdad y otras ciudades, pero bajo presión, los levantó dos días después. En respuesta a las reacciones contra la severidad de la violencia, el gobernador de Bagdad renunció. Se ofrecieron algunas concesiones, el 6 de octubre el primer ministro, Adel Abdul Mahdi, anunció medidas para mejorar los niveles de vida y empleo. El 22 de octubre el gobierno **afirmó** que 12 militares y comandantes de policía serían removidos de sus cargos y sometidos a juicio por permitir que sus tropas dispararan contra los manifestantes.

No contentos con estas concesiones ni desmotivados por la represión, los manifestantes motorizaron una segunda ola de protestas que estalló al final de octubre; junto con ella, **se endureció** la represión estatal. Al menos **siete personas más** murieron solamente el 26 de octubre, en protestas en Bagdad y Nasiriyah, y entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre murieron más de 97 personas y miles resultaron heridas. La mayoría de las personas muertas tenía impactos de bala en la cabeza o el pecho, indicando que se había apuntado deliberadamente contra ellos. La represión se extendió: en la provincia de Anbar las fuerzas de seguridad **arrestaron** gente simplemente por haber

publicado mensajes de solidaridad en Facebook. En noviembre, el gobierno también ordenó el **cierre**, por un período de varios meses, de 12 estaciones de TV y radio, advirtió a cinco más que moderaran su cobertura; el mes anterior había **clausurado** el acceso a internet durante varios días y bloqueado varias plataformas clave de redes sociales y comunicaciones.

El 6 de noviembre, los manifestantes bloquearon un puente en el centro de Bagdad, provocando otra respuesta letal de las fuerzas de seguridad, que **asesinaron a 13 personas** en el curso de 24 horas. Los desarmados **estudiantes de secundaria y universitarios** parecieron ser el blanco deliberado de las armas de fuego; la élite dominante, incapaz de escuchar las demandas de personas jóvenes deseosas de alcanzar sus objetivos, estaba en cambio masacrándolas.

El 6 de noviembre fue un día gris: el destacado escritor y activista Amjad Al-Dahamat –uno de los más importantes líderes de protestas en la provincia de Maysan- fue **asesinado** cerca del cuartel de policía de la ciudad de Al-Amarah, tras participar en una reunión con el comandante de policía y varios activistas; otra persona que había participado en la misma reunión, Bassam Mehdi, fue herida de gravedad en el mismo ataque. Esa misma noche, el médico Abbas Ali fue asesinado por la policía antidisturbios en Bagdad; su delito había sido intentar llegar a los manifestantes heridos para ofrecerles tratamiento médico de emergencia. Al día siguiente, el periodista y activista de la sociedad civil Ali Hashim fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y el activista de sociedad civil Hussain Al-Kaabi fue arrestado durante una protesta. Otros activistas de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de la salud fueron secuestrados en esos mismos días. Mientras que algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros fueron sometidos a torturas y liberados luego de poner su firma en el compromiso de no participar en las protestas. Claramente el Estado había decidido intensificar la represión, y los asesinatos de activistas de la sociedad civil continuaron.

A finales de noviembre se produjo una masacre. Las fuerzas de seguridad **asesinaron a tiros** a por lo menos 45 manifestantes luego de que éstos ocuparan e incendiaron el Consulado de Irán en Najaf, en protesta por la influencia de Irán sobre Irak. Al menos otras 29 personas murieron en la ciudad de Nassiriya cuando las tropas abrieron fuego contra manifestantes que habían bloqueado un puente y se habían reunido frente a una estación de policía. Se reportó la muerte de doce personas en enfrentamientos en Najaf; otras cuatro fueron asesinadas en Bagdad, donde las fuerzas de seguridad dispararon con armas de fuego y balas de goma contra una protesta cerca de un puente sobre el río Tigris.

Desde el comienzo de las protestas hasta el momento de redactar este informe, al menos **700 personas** han sido asesinadas. A medida que el COVID-19 se expandió alrededor del mundo y las ciudades fueron puestas bajo confinamiento, las protestas quedaron suspendidas. Pero en Irak, los manifestantes se comprometieron a continuar **presionando con sus demandas**, entendiendo que el gobierno y la corrupción eran un virus más apremiante y más letal que la propia enfermedad.

Por lo menos el primer ministro Mahdi debió pagar las consecuencias de la masacre: el 29 de noviembre, presionado por los líderes religiosos, **anunció su renuncia** y pidió al parlamento que iniciara el proceso de elección de un nuevo líder. Se trata de un proceso largo, que continúa en el momento de redacción de este informe. En febrero de 2020 se anunció la elección de Mohammed Tawfik Allawi como primer ministro, lo cual volvió a generar **indignación** entre los manifestantes, quienes lo consideraban uno más de una élite desacreditada. El nuevo primer ministro **dimitió** al mes siguiente después de que el parlamento

no aprobara a su gabinete.

Cualquier candidato que termine imponiéndose tendrá que ser aceptado no solo por las varias facciones políticas en disputa sino también por Irán. La élite gobernante parece estar más preocupada por ello que por lo que piensen las numerosas personas que salieron a protestar. El proceso de nombramiento de un nuevo primer ministro no parece tomar en cuenta la opinión de las personas jóvenes que continuaron protestando en 2020; quien sea que resulte electo, difícilmente podrá satisfacerlas. El próximo líder del país, quienquiera que sea, deberá enfrentar la persistente demanda de las protestas de efectuar cambios reales para reducir la corrupción, crear empleos, redistribuir riqueza y restaurar las libertades democráticas y religiosas. Se trata de una agenda amplia, a la que seguramente se sumará una nueva demanda –la de hacer justicia por los centenares de personas que han sido asesinadas por un sistema que se negó a escucharlas. No es de esperar que el actual sistema de gobernanza esté en condiciones de ofrecer estas respuestas.



El 6 de diciembre de 2019 los manifestantes encienden velas en Bagdad, Irak, en homenaje a los asesinados en las protestas que ya llevan más de dos meses.
Crédito: Scott Peterson/Getty Images



En diciembre de 2019 la gente se manifiesta en París, Francia, en solidaridad con las protestas y contra la represión en Irán. Crédito: Frederic Stevens/Getty Images

IRÁN: RESPUESTA LETAL ANTE PROTESTAS GENERALIZADAS

En el poderoso vecino de Irak, Irán, el anuncio de un fuerte **incremento** en los precios de los combustibles desencadenó protestas masivas desde el 15 de noviembre. Como ocurrió en otros casos, cuando el gobierno de este país tan rico en petróleo pidió a gente que atravesaba dificultades económicas que pagara más por el combustible, la respuesta fue de indignación. Una serie de reclamos adicionales rápidamente se sumaron en una protesta antigubernamental más amplia. Al igual que en Irak, la respuesta del gobierno fue letal.

Pese a la represión que inevitablemente enfrentan, las protestas no son novedad en Irán. Entre las protestas de los últimos años se cuentan el masivo Movimiento

Verde de 2009 y 2011, las **protestas antigubernamentales** desarrolladas entre diciembre de 2017 y enero de 2018 y las **protestas de mujeres** contra el uso obligatorio del velo en 2018. Al igual que en las protestas de 2017 y 2018, problemas como la alta inflación, el desempleo –particularmente entre los jóvenes- y la inseguridad económica se conectaron rápidamente con la preocupación por la falta de democracia y libertad. La gente culpó por las dificultades económicas al mal manejo económico y a la corrupción, más que solamente al impacto de las sanciones internacionales impuestas sobre Irán. El aumento de los precios de los combustibles fue percibido como algo que les impactaría gravemente pero que, en cambio, apenas afectaría a las élites adineradas.

Los manifestantes enfocaron su ira no solo en estos asuntos de política interna sino también en la amplia agenda de política exterior de Irán, que en su batalla contra Arabia Saudita por la supremacía regional ha ejercido influencia en

el Líbano, Siria y Yemen, así como en Irak. La gente contrastó las ambiciones imperialistas de su gobierno con su propia pobreza y acusó a su gobierno de perder de vista los problemas más importantes. Otro rasgo novedoso del proceso fue que los manifestantes cuestionaron la presentación de Israel y Estados Unidos como enemigos mortales de Irán, la estrategia con que el gobierno acostumbra a canalizar hacia el exterior la ira que en otro caso se volvería en su contra. La gente comenzó a exigir la caída del gobierno.

La composición de las protestas también fue más amplia que en el pasado. Algunas protestas previas exhibieron una presencia desproporcionada de clase media urbana y educada; en este caso, en cambio, el aumento del precio del combustible activó a habitantes de pueblos más pequeños y de menores ingresos, que usualmente dan su apoyo al gobierno. Las protestas movilizaron a un amplio bloque transversal de la sociedad: los estudiantes dejaron sus universidades para protestar, los comerciantes hicieron huelga, los sindicalistas llamaron a la acción. Las protestas se iniciaron en la capital, Teherán, y se expandieron rápidamente por todo Irán. Hubo protestas en al menos 120 ciudades y pueblos, en lo que pareció ser la movilización iraní más grande desde la revolución de 1978-1979.

Tanto las demandas crecientes de derrocamiento del régimen como su carácter generalizado convirtieron a las protestas en una amenaza existencial para la élite teocrática gobernante de Irán. La respuesta del Estado iraní a las protestas masivas ha sido siempre la represión violenta; en esta oportunidad, la sensación de amenaza que experimentó el régimen generó una reacción mucho más letal de lo habitual. Altos funcionarios dieron **luz verde** para que las protestas fueran suprimidas por los medios que fuesen necesarios, a lo que siguió una ola de asesinatos perpetrada por las fuerzas de seguridad, que dispararon armas de fuego contra los manifestantes, **apuntando** a la cabeza y al pecho de las personas, poniendo en evidencia su intención de asesinarlas. Se reportó que las tropas disparaban al azar desde azoteas y helicópteros, con armas de fuego y ametralladoras.

Una investigación estimó que **1.500 personas** fueron asesinadas, 400 de ellas mujeres y 17 adolescentes. Se trató de una matanza sin precedentes incluso para los estándares de represión letal de Irán. Fue difícil incluso calcular el número de muertes con precisión, ya que aparentemente las fuerzas del gobierno habrían removido y ocultado los cuerpos para evitar que se registraran las cifras reales. Los **familiares** de los muertos fueron presionados para que no hablaran con los medios de comunicación, realizaran funerales, o lloraran a

sus muertos públicamente. Los que fueron más afortunados y lograron escapar con heridas fueron arrestados en los centros médicos.

La violencia de la represión contribuyó a alimentar la violencia: cuando no tiene otra forma de expresión a mano, la gente quemará y romperá cosas. Los manifestantes atacaron y destruyeron imágenes de los líderes de Irán, así como afiches anti-estadounidenses, en una muestra de rechazo hacia la propaganda estatal. Centenares de sucursales de bancos estatales fueron prendidas fuego. Los manifestantes también apuntaron contra instituciones religiosas vinculadas con el régimen.

Se impuso una **suspensión** de seis días del servicio de internet, lo cual permitió que la represión continuara sin límites y mayormente **sin control**. El gobierno también envió a la gente mensajes de texto advirtiendo de las serias consecuencias de participar en las protestas y citó a los manifestantes a los centros de seguridad. El gobierno llamó **“agitadores”** a las personas que había asesinado y calificó a los manifestantes como agentes extranjeros de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos involucrados en una conspiración en su contra.

La abrumadora represión funcionó, al menos por ahora, y luego de casi dos semanas las protestas concluyeron. Tras el final brutal de las protestas, el gobierno continuó su **campaña** de arrestos arbitrarios, detenciones, desapariciones forzadas y torturas, buscando acallar no solo a las personas relacionadas con las protestas sino también a periodistas, activistas de derechos laborales y personas defensoras de los derechos de las minorías, es decir, a cualquiera que pudiese dar testimonio de la masacre. Según se informó, más de **7.000 manifestantes** fueron arrestados.

En enero de 2020, sin embargo, las protestas estallaron nuevamente. Cuando la Guardia Revolucionaria Islámica derribó un vuelo de Ukrainian International Airlines en el espacio aéreo iraní e intentó encubrirlo, la gente **salió a las calles** para expresar su descontento contra el gobierno. Estas manifestaciones fueron precedidas de protestas de gente indignada por el asesinato del general iraní Qasar Soleimani en Irak, cometido días antes por Estados Unidos. Estas protestas, patrióticas y en defensa de la soberanía nacional, no necesariamente expresaron apoyo hacia un régimen en el que claramente mucha gente ya no confiaba. La escala de los asesinatos y las torturas demostró que el Estado considera que la vida de sus ciudadanos no tiene ningún valor. Muchos iraníes continuarán exigiendo un gobierno que los respete.

EGIPTO: PROTESTAS ANTICORRUPCIÓN DESAFÍAN LA REPRESIÓN

Como en Irán, los egipcios no protestan a la ligera, porque saben que viven en un estado represivo y que si alzan la voz enfrentan graves consecuencias, tales como encarcelamiento y violencia de las fuerzas de seguridad. El presidente y antiguo jefe del ejército, Abdul Fattah al-Sisi, a la cabeza del golpe militar de 2013, ha mantenido desde entonces un férreo control del poder, **manipulando** la elección presidencial de 2018 para asegurarse de que solo enfrentaría una oposición simbólica. Sin embargo, la gente experimenta dificultades cotidianas de empleo y falta de bienes básicos en un contexto de infraestructura inadecuada, y es consciente de la corrupción de las altas esferas. Cuando se les niega la voz en las elecciones, a veces salen a las calles o alzan la voz en internet, sin reparar en el peligro.

En la mañana del 27 de febrero, un tren se estrelló contra el final de vía en la estación Ramsés de la capital, El Cairo, iniciando un incendio que dejó 25 muertos. No fue el único **accidente de tren** de los últimos años. El ministro de transporte renunció, pero aun así el descontento se extendió por las **redes sociales** y se expresó en pequeñas protestas. El accidente ocurrió a pesar del compromiso del gobierno de modernizar el sistema de trenes; la gente contrastó la evidente falta de mantenimiento del sistema de transporte con el también evidente afán del gobierno por desarrollar grandes proyectos de infraestructura que ofrecen un lucrativo potencial para la corrupción, y en particular una grandiosa nueva capital administrativa actualmente en construcción al este de El Cairo. Las personas denunciaron la corrupción y **acusaron** al gobierno de no preocuparse por sus vidas. La respuesta del gobierno fue tristemente predecible: al menos 70 personas fueron **arrestadas**, algunas con el argumento de que sus cuentas en **redes sociales** tenían contenido relacionado con el accidente de trenes. Dio la impresión de que, para la infraestructura represiva, en Egipto siempre hay dinero disponible.

La maquinaria autoritaria se activó contra las nuevas protestas antigubernamentales que **estallaron** en ciudades de todo el país en septiembre, desafiando a la ley que considera ilegales a las protestas no autorizadas. El motivo en esta ocasión fue la **publicación** en redes sociales de una serie de videos de Mohamed Ali, un informante exiliado, que denunciaban la **corrupción**. Una **activista y manifestante egipcia** que por razones de seguridad pidió mantenerse en el anonimato cuenta la historia:

*El detonante de las protestas de septiembre fue una serie de videos virales compartidos por un actor egipcio y contratista de la construcción, Mohamed Ali, donde acusaba a las autoridades y a las fuerzas armadas de corrupción y malversación de fondos públicos. Si bien el presidente Abdul Fattah El-Sisi finalmente abordó de alguna forma los videos, luego aparecieron más **videos** de Ali y otros; ello inició una conversación más amplia sobre el rol del ejército en la economía de Egipto.*

*El 20 de septiembre, y en parte en respuesta a los llamados de Ali a protestar contra Sisi, cientos **salieron** a las calles en El Cairo, Alexandria, Suez y otras ciudades. Como parte de esta ola de protestas, más manifestaciones se realizaron el 20, 21 y 27 de septiembre. Ocurrieron en un contexto en el que muchos ciudadanos egipcios estaban soportando el impacto de las medidas de austeridad y recortes a los subsidios y se veían afectados cada vez más por la escalada de represión contra la expresión independiente y pacífica.*

Los manifestantes pedían la renuncia de Sisi y recibieron una violenta respuesta, con el uso ocasional de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, así como de gas lacrimógeno y macanas. Las autoridades cerraron grandes secciones de El Cairo y establecieron retenes arbitrarios de búsqueda para prevenir otras posibles protestas el 27 de septiembre.

Pese a que las protestas fueron nuevamente reprimidas con rapidez, la campaña en contra de cualquiera que estuviera relacionado con ellas continuó. El gobierno llevó a cabo un programa de arrestos masivos y detenciones en septiembre y los meses siguientes. **Entre los** arrestados estaban líderes de la sociedad civil, periodistas, abogados y académicos, junto a más de **100 niños**, y hubo reportes creíbles de tortura contra las personas en detención. La entrevistada describe las restricciones que siguieron a las protestas:

*Inmediatamente después de las protestas y en los días siguientes, las autoridades egipcias realizaron una campaña generalizada de arrestos dirigida no solo contra quienes habían participado en las protestas, sino también contra abogados, activistas políticos y personas defensoras en general. Las OSC locales estimaron que al menos 3.763 personas **fueron arrestadas**. Se ordenó la detención preventiva para muchas de estas personas en casos en que se les acusaba de pertenecer a organizaciones terroristas y difundir noticias falsas; varias de ellas siguen detenidas.*

Como consecuencia de las protestas, Netblocks **reportó** restricciones al uso de los servidores de Facebook Messenger, BBC News y la red social CDN (red de distribución de contenido). En El Cairo, las autoridades bloquearon algunas calles y cerraron temporariamente algunas paradas de metro, particularmente las cercanas a la Plaza Tahrir.

Junto a los bloqueos a las redes sociales, la autoridad de medios de comunicación **advirtió a los periodistas** que estaba monitoreando su cobertura. En octubre, expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su **preocupación** por los reportes de abusos procedentes de Egipto. Pero lo sucedido era parte de un proceso de represión más grande y persistente, que volvió imposible la expresión pública del disenso, como indica nuestra entrevistada:

*Se continuaron usando la detención preventiva por períodos extensos como medida punitiva y las sentencias en juicios masivos, y aumentaron las **condenas a pena de muerte**. Las condiciones de detención son malas; **abundan** los casos de torturas y muerte durante la detención como resultado de la falta de acceso a cuidado médico.*

*Progresivamente desde 2013, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Egipto se han deteriorado severamente. Las autoridades están **usando la ley** para consolidar el autoritarismo. Esto se refleja en la nueva legislación que restringe los derechos y reescribe la relación entre ciudadanos y Estado; la persecución del activismo pacífico mediante una muy amplia legislación antiterrorista; y la introducción de enmiendas constitucionales para permitir la influencia e interferencia del ejecutivo en el funcionamiento de instituciones que deben ser independientes, como el poder judicial y la fiscalía.*

Entre los dos momentos de protesta de 2019, el presidente Sisi maniobró para consolidar aún más su poder. En abril el gobierno impulsó un referéndum sobre enmiendas constitucionales que extendían el mandato de Sisi en el poder y le permitían postularse nuevamente, habilitándolo para gobernar hasta 2030. Las enmiendas también ampliaban el rol del todopoderoso ejército en el gobierno y le otorgaban al presidente nuevos poderes sobre el órgano judicial.

El pseudo referéndum marcó otro capítulo en la **lamentable tendencia** de líderes autoritarios que convocan elecciones en entornos cerrados con el fin de dar un sello de legitimidad a su permanencia en el poder. Hubo pocas oportunidades de hacer campaña contra la propuesta, ya que los medios de comunicación habían sido silenciados y muchas de las personas que la pudieron haber liderado se encontraban detenidas. Un sitio web que fue creado para reunir firmas contra el cambio fue rápidamente **bloqueado**. No resultó sorprendente que el resultado del referéndum ratificara el cambio, pese a la baja participación y a los numerosos reportes de **irregularidades** en la votación y evidencias de que la gente era **forzada o sobornada** con dinero o comida para que votara.

Reforzando aún más las restricciones, en agosto entró en vigencia una **nueva ley de ONG**. Si bien se la presentó como una mejora en relación con la draconiana Ley de ONG de 2017, en realidad muchos de los cambios fueron superficiales y los aspectos más represivos de la ley de 2017 se mantuvieron. La ley otorgó

“EL ESTADO DE DERECHO Y EL RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EGIPTO SE HAN DETERIORADO SEVERAMENTE. LAS AUTORIDADES ESTÁN USANDO LA LEY PARA CONSOLIDAR EL AUTORITARISMO”

ACTIVISTA Y MANIFESTANTE ANÓNIMA



al Estado amplios poderes para denegar el registro a OSC e imponer multas punitivas por operar sin licencia o recibir fondos sin aprobación del gobierno. La entrevistada plantea algunos de los desafíos persistentes:

La Ley de ONG de 2019 elimina las sanciones de encarcelamiento, así como a la Agencia Nacional para Regular el Trabajo de ONG Extranjeras, un cuerpo de seguridad e inteligencia creado por la Ley de ONG de 2017 para aprobar y monitorear el financiamiento internacional. Sin embargo, la ley intensifica algunas restricciones importantes sobre las actividades de las OSC, establece limitaciones burocráticas al registro y dota a las agencias gubernamentales de una extensa autoridad de vigilancia y monitoreo.

Si bien puede que sea demasiado pronto para conocer el impacto preciso de la nueva ley, no hay duda de que su aprobación ha contribuido a cierta autocensura, ya que las OSC han reportado sentir incertidumbre respecto de los esquemas legales que regularán su trabajo y también han expresado preocupación por las fuertes restricciones de la ley. La ley fue aprobada en un ambiente caracterizado por las prohibiciones de viaje, el congelamiento de activos y el procesamiento y arresto de miembros de la sociedad civil. Se espera que estas tendencias continúen. Es importante destacar que la Ley de ONG no es la única ley que regula a la sociedad civil: la ley de medios de comunicación, la ley de delitos informáticos, la Ley Antiterrorista y el Código Penal son ejemplos de leyes que también contienen disposiciones con implicaciones para las actividades de las asociaciones.

Al igual que ocurrió con el manipulado referéndum, fue difícil ver a la nueva ley como algo más que un ejercicio de mercadeo para el consumo internacional: una señal de apertura del espacio para la sociedad civil enviada por el gobierno de Egipto para que sus aliados estratégicos mantuvieran la calma, aunque la realidad fuera todo lo contrario. La gente de Egipto no será engañada por estos gestos vacíos; sabe que vive en un estado caracterizado por la crueldad y el desprecio de sus derechos. Por ello, aunque el precio del disenso siga siendo muy alto, seguirán estallando protestas.

ZIMBABUE: FUERTE REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS POR LOS COMBUSTIBLES

En enero, el súbito y marcado incremento de los precios de los combustibles, que llevó a una subida de más del doble de los precios de la gasolina y el diésel, también detonó **protestas** en Zimbabwe. La medida fue tomada en medio de una **escasez** no solo de combustibles, sino también de otros alimentos básicos y **medicamentos**, y fue probablemente motivada por la intención del gobierno de buscar un crédito del FMI. La gente se manifestó en la capital, Harare, y en la segunda ciudad más importante de Zimbabwe, Bulawayo. El Congreso de Sindicatos de Zimbabwe convocó a una **huelga general** de tres días y los manifestantes erigieron barricadas y quemaron llantas.

La respuesta del gobierno demostró que no había cambiado mucho: el actual presidente, Emmerson Mnangagwa, había sustituido en 2017 al longevo dictador Robert Mugabe, pero el partido de gobierno, el ZANU-PF, se había mantenido en el poder tras la cuestionada **elección de 2018**. A pesar de los cambios en el liderazgo, las tácticas violentas de **represión** se mantuvieron. La **violenta** represión de las protestas de enero dejó al menos 17 personas muertas, muchas de ellas por heridas de bala luego de que las fuerzas de seguridad dispararan **armas de fuego**. Se reportaron más de mil personas arrestadas. También se reportó que la policía **entraba a las viviendas** en algunos vecindarios y agredía, disparaba o se llevaba a los residentes. Hubo reportes de allanamientos en centros médicos donde se brindaba tratamiento a los heridos. También hubo múltiples reportes de **violaciones y agresiones sexuales** por parte del personal militar. El ejército, una fuerza decisiva en el derrocamiento de Mugabe y en la toma de posesión de Mnangagwa como presidente, estuvo, según se dijo, detrás de los **peores abusos**.

El acceso a internet y las redes de telefonía móvil fue **suspendido** y se bloqueó el acceso a las principales plataformas de redes sociales; no era la primera vez que esto ocurría. Nuevamente, prominentes activistas fueron acorralados. El pastor **Evan Mawarire**, líder del movimiento de protesta #EstaBandera (#ThisFlag), quien había sido acosado y detenido en repetidas ocasiones bajo el régimen de Mugabe, fue nuevamente **detenido** y acusado de subversión luego de que convocara a protestas pacíficas a través de las redes sociales; cuando salió bajo fianza, habló del grotesco hacinamiento y las heridas sufridas por las personas detenidas.

En lugar de abordar estas preocupaciones, el ministro de seguridad nacional

culpabilizó a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de jóvenes, por orquestar la violencia, y las acusó de trabajar con el partido de oposición, la alianza Movimiento para el Cambio Democrático (MCD). En una rueda de prensa, el gobierno **culpó** a las “ONG ilegales” vinculadas a poderes extranjeros. En un discurso durante una manifestación en febrero, el presidente Mnangagwa **amenazó** con “ir tras” los abogados y medios que habían ofrecido ayuda a manifestantes y personas detenidas. En consecuencia, la represión **continuó**, ya que el gobierno decidió usar los días posteriores a las protestas para perseguir a sus detractores. Más líderes de OSC, líderes sindicales incluidos, además de otras personas defensoras de derechos humanos y miembros del MCD, fueron arrestados. Entre ellos se encontraba **Rashid Mahiya**, líder de la Coalición Zimbabwe en Crisis. Varios periodistas que cubrieron las protestas y los eventos de los días siguientes fueron acosados y detenidos. Muchas personas decidieron ocultarse.

Otra protesta sobre el estado de la economía y la deficiente gestión económica del gobierno, organizada por el MCD, se realizó en Harare en agosto, dejando como resultado un estimado de **128 arrestos**. Otra protesta planeada por el MCD fue **cancelada** por efecto de una orden judicial. Quienes ya se habían reunido para la protesta fueron **violentamente dispersados** por la policía, que hizo uso de gases lacrimógenos y macanas; también **arrestó y detuvo** a un alto funcionario del MCD por no haber impedido la protesta. La policía también estableció retenes y barricadas, y realizó búsquedas al azar.

Antes de las protestas programadas, hubo más **reportes** de integrantes de la sociedad civil y la oposición secuestrados y torturados. El activista por la democracia **Tatenda Mombeyarara** fue uno de los por lo menos seis activistas de derechos humanos que terminaron hospitalizados luego de haber sido **secuestrados**, torturados y brutalmente golpeados, en agosto, por personas que se sospecha eran agentes del Estado.

Simplemente burlarse del Estado representaba un alto riesgo: también en agosto, la comediente Samantha Kureya, más conocida como **Gonyeti**, tuvo que **ocultarse** tras ser secuestrada, desnudada y golpeada debido a sus parodias satíricas de las autoridades.

Entretanto, a medida que las condiciones de vida se **deterioraban** para todos excepto para las elites adineradas, y la inflación volvía a **aumentar**, los **funcionarios públicos** protestaron por sus salarios, en medio de fuerte presencia policial, y los médicos de dos de los principales hospitales de



Los manifestantes cantan canciones de protesta en una calle acordonada por la policía en Harare, Zimbabwe. Crédito: Tafadzwa Ufumeli/Getty Images

Zimbabwe **hicieron huelga**. En noviembre, en un intento por suspender la huelga, el gobierno **despidió** a 286 médicos. Pero antes de eso había enviado un inquietante mensaje: Peter Magombeyi, jefe interino de la Asociación de Médicos de Hospitales de Zimbabwe y organizador de la huelga, fue **secuestrado** en septiembre y retenido por cuatro días. Reportó haber sido torturado con choques eléctricos. El gobierno le **negó** la salida del país para buscar tratamiento por sus heridas. En noviembre también se observó el uso de **gas lacrimógeno y macanas** contra gente reunida para escuchar un discurso del líder del MCD Nelson Chamisa.

El gobierno continuó acusando a las OSC de “**interferencia**” política e intentó desacreditar los reportes de violencia estatal, haciendo uso de la nueva expresión favorita de los regímenes dictatoriales, “**noticias falsas**”. Quedó claro que, tras la caída de Mugabe, lo que hubo en Zimbabwe no fue una transición a la democracia. Todavía no hay una economía que funcione para la gente ni tampoco libertades democráticas y cívicas. Los sueños populares de progreso auténtico siguen quedando frustrados por la actitud ensimismada de la élite gobernante; la gente seguirá reclamando un nuevo comienzo y una ruptura con la trágica historia de desgobierno de Zimbabwe.